

ANEXO 9:

**INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
(CAJP) DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
(09 DE MARZO DE 2001)**

CONSEJO PERMANENTE DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

OEA/Ser.G
CP/CAJP-1770/01
16 marzo 2001
Original: español

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS, JUEZ ANTÔNIO A. CANÇADO TRINDADE,
ANTE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS Y POLITICOS
DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Washington, D.C., 9 de marzo de 2001)

Señora Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA,
Embajadora Margarita Escobar,

Señoras y Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros de la OEA,

Hace casi un año, el jueves 13 de abril de 2000, tuve el honor de comparecer, acompañado por el Juez Alirio Abreu Burelli y por el Secretario, Manuel E. Ventura Robles, ante esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entonces presidida por el Embajador Claude Heller, Representante Permanente de México ante la OEA. En aquella oportunidad realicé una extensa presentación del *Informe Anual* de 1999, en mi carácter de Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de la cual 16 Delegaciones hicieron uso de la palabra para apoyar al Tribunal por la fecunda labor realizada durante ese año y para expresar su deseo de que la Organización continúe apoyando a la Corte.

Hoy, 9 de marzo de 2001, en compañía del Vicepresidente y otros cuatro Jueces de la Corte, y del Secretario y otros miembros de la Secretaría del Tribunal, tengo el honor de volver a dirigirme a los Representantes de los Estados miembros de la OEA, esta vez con el objeto de presentar, ante esta misma Comisión del Consejo Permanente, el *Informe Anual* de la Corte correspondiente al año 2000, el cual fuera enviado a la OEA el día 17 de febrero pasado, y que ha sido distribuido entre las Delegaciones presentes.

La presencia, en esta mi presentación ante la OEA, de cinco de mis colegas Jueces de la Corte, que gentilmente se dispusieron a acompañarme a Washington DC., tiene un valor sim-

bólico: además de indicar el espíritu colegial que inspira nuestra labor conjunta, revela la importancia que nuestro Tribunal atribuye al rol de los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como, en última instancia, garantes de nuestro sistema regional de protección. La noción de *garantía colectiva*, ejercida por todos los Estados Partes en conjunto, está subyacente tanto a la Convención Americana como a todos los tratados de derechos humanos.

Permítome pasar al relato de las actividades de la Corte durante el año de 2000. Los aspectos medulares de mi *Informe* son resumidos a continuación.

I. Sometimiento de Nuevos Casos Contenciosos y Medidas Provisionales

A lo largo del año 2000, se sometieron a la consideración de la Corte Interamericana tres nuevos casos contenciosos, a saber: casos *Constantine y otros* y *Benjamin y otros* contra Trinidad y Tobago, y caso *Barrios Altos* contra el Perú. Además, se sometieron dos solicitudes de medidas provisionales de protección: el caso de *Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana*, y el caso de la *Comunidad de Paz de San José de Apartadó* respecto de Colombia. En adición, se adoptaron de oficio tres resoluciones de medidas provisionales de protección, en los casos *del Tribunal Constitucional*, *Ivcher Bronstein* y *Loayza Tamayo*, todos concernientes al Perú.

II. Períodos de Sesiones

El Tribunal realizó tres períodos ordinarios y un período extraordinario de sesiones durante el año 2000. En dichos períodos de sesiones¹ se desarrollaron las siguientes actividades: 11 audiencias públicas sobre medidas provisionales, excepciones preliminares, fondo, reparaciones, y sobre una solicitud de interpretación de una sentencia de fondo; se dictaron sentencias sobre excepciones preliminares en los casos de la *Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni* contra Nicaragua, y *Las Palmeras* contra Colombia; sentencias de fondo en los casos *Durand y Ugarte* y *Cantoral Benavides*, ambos contra el Perú, *Trujillo Oroza* contra Bolivia y *Bámaca Velásquez* contra Guatemala; sentencia de interpretación de sentencia de fondo en el caso *Cesti Hurtado* contra el Perú; resoluciones sobre cumplimiento de sentencia en los casos *El Amparo* contra Venezuela y *Garrido y Baigorria* contra Argentina; resoluciones sobre práctica de prueba al interior del Estado (exhumación de los cadáveres de dos de las supuestas víctimas) en el caso *Las Palmeras*; resoluciones sobre requerimiento al Estado de localizar a los familiares de varias víctimas para que participaran en la etapa de reparaciones en los casos *Villagrán Morales y Otros (caso de los "Niños de la Calle")* contra Guatemala y *del Caracazo* contra Venezuela; se dictaron 7 resoluciones en las medidas provisionales adoptadas en *Álvarez y Otros*, y *Clemente Teherán y otros*, ambas respecto de Colombia; *James y Otros* respecto de Trinidad y

1 XLVII (del 24 de enero al 04 de febrero), XLVIII (del 07 al 18 de agosto), y XLIX (del 16 al 25 de noviembre) Períodos Ordinarios de Sesiones; y XXIV (del 12 al 15 de noviembre) Período Extraordinario de Sesiones.

Tobago; *Colotenango* y *Blake*, ambos respecto de Guatemala; se adoptaron las medidas provisionales ya mencionadas en los casos de *Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana*, en los casos del Tribunal Constitucional e *Ivcher Bronstein* respecto del Perú, así como en el caso de la *Comunidad de Paz de San José de Apartadó* respecto de Colombia. Además, se levantaron las medidas provisionales ordenadas en el caso *Cesti Hurtado* respecto del Perú.

La Corte tiene actualmente en trámite 30 casos contenciosos en etapas procesales diferentes, además de 15 medidas provisionales de protección. El Tribunal reafirma su compromiso de atender ese volumen de trabajo con la mayor celeridad posible, sin perjuicio de la seguridad jurídica, siempre y cuando no se recorte su presupuesto y se den los incrementos solicitados para el año 2002, - claro está, tomando en cuenta las limitaciones de sus recursos humanos y materiales y, principalmente, el hecho de no ser todavía un tribunal permanente. Esto ha exigido un compromiso cada vez mayor de los Señores Jueces para sesionar con más frecuencia y asumir con dedicación nuevas obligaciones que deben ser cumplidas en sus domicilios (Vg., redacción de proyectos de sentencias, comunicación más frecuente con la Secretaría de la Corte, y consultas con los demás los Jueces), labores que son realizadas sin compensación monetaria alguna debido a la falta de provisión de fondos.

III. Aceptación de la Competencia Contenciosa de la Corte

Con motivo de la celebración del XXX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en Windsor, Canadá, se celebró, el lunes 5 de junio de 2000, una ceremonia en la cual Barbados reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En este acto, de tanta trascendencia para la consolidación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, estuvieron presentes la Ministra de Relaciones Exteriores de Barbados, Sra. Billie A. Miller; el Secretario General de la OEA, Sr. César Gaviria Trujillo; mi persona como Presidente de la Corte Interamericana; el Vicepresidente, Juez Máximo Pacheco Gómez; el Secretario, Sr. Manuel E. Ventura Robles, así como varios Embajadores Representantes Permanentes de los Estados Caribeños ante la OEA.

Cabe recordar que el Perú, mediante comunicación del 9 de julio de 1999, presentó un documento en la Secretaría General de la OEA en Washington, DC., mediante el cual comunicó que "retira[ba] la declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", retiró éste que, en su entender, "producir[ía] efecto inmediato y se aplicar[ía] a todos los casos en que el Perú no hubiese contestado la demanda incoada ante la Corte". La Corte examinó el efecto de dicha declaración en los casos *Ivcher Bronstein* y del *Tribunal Constitucional* (Sentencias sobre competencia, de septiembre de 1999), y declaró inadmisibles las pretensiones del Estado Peruano de retirar con efectos inmediatos la declaración de reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte, y decidió continuar el conocimiento y la tramitación de ambos casos.

Hace pocas semanas (el 12 de enero de 2001), el Perú aprobó la Resolución Legislativa No. 27401 con un artículo único cuyo texto reza: - "Derógase la Resolución Legislativa n. 27152 y encárgase al Poder Ejecutivo realizar todas las acciones necesarias para dejar sin efecto los resultados que haya generado dicha resolución legislativa, restableciéndose a plenitud para el Estado Peruano la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

La Corte toma nota con gran satisfacción del propósito recientemente expresado, por los órganos del Estado Peruano, de normalizar las relaciones con el Tribunal, de conformidad con los principios que inspiraron la ratificación de la Convención Americana y el cumplimiento de buena fe de este instrumento de protección internacional de los derechos humanos. Esta expresión de la voluntad estatal de cumplir con las obligaciones internacionales libremente contraídas, que representa el reencuentro del Estado Peruano con su mejor tradición y pensamiento jurídicos, fue recientemente reiterada por el Excmo. Sr. Ministro de Justicia del Perú, Dr. Diego García-Sayán, en la visita realizada a la sede de la Corte el pasado 09 de febrero de 2001. La Corte manifiesta su confianza en que el Estado Peruano dará pleno cumplimiento, en un plazo razonable, a todas las Sentencias dictadas por la Corte pendientes de ejecución.

Asimismo, sobre el tema de la aceptación de la competencia de la Corte, me permito formular un llamado - tal como lo hice en mi *Informe* del año pasado - a los Estados que todavía no lo han hecho, para que ratifiquen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconozcan la competencia obligatoria de la Corte Interamericana en materia contenciosa, a fin de que nuestro sistema de protección de los derechos humanos se enriquezca con la universalidad de composición en el ámbito regional de su operación.

Tengo la firme convicción, - tal como la he expresado en distintas ocasiones, - de que el real compromiso de un país con los derechos humanos internacionalmente reconocidos se mide por su iniciativa y determinación de tornarse Parte en los tratados de derechos humanos, asumiendo a_í las obligaciones convencionales de protección en éstos consagradas. En el presente dominio de protección, los mismos criterios, principios y normas deben valer para todos los Estados, jurídicamente iguales, así como operar en beneficio de todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad o cualesquiera otras circunstancias.

Los Estados que se han autoexcluido del régimen jurídico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen una deuda histórica con el sistema interamericano de protección, que hay que rescatar. Mientras todos los Estados miembros de la OEA no ratifiquen la Convención Americana, no acepten integralmente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y no incorporen las normas sustantivas de la Convención Americana en su derecho interno, muy poco se avanzará en el fortalecimiento real del sistema interamericano de protección. Es poco lo que pueden hacer los órganos internacionales de protección, si las normas convencionales de salvaguardia de los derechos humanos no alcanzan las bases de las sociedades nacionales. Es por esto que me permito hoy reformular mi llamado, respetuoso pero franco, que espero repercuta debidamente en la conciencia jurídica de totalidad de los Estados miembros de la OEA.

IV. Reunión de las Directivas de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos

El día 18 de noviembre de 2000 se celebró una reunión en la sede de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, entre el Presidente y Vicepresidente de la Corte, Jueces Antônio A. Cançado Trindade y Máximo Pacheco Gómez, con el Presidente y Primer Vicepresidente de la Comisión, Comisionados Hélio Bicudo y Claudio Grossman. La reunión puso de manifiesto las estrechas y armónicas relaciones de coordinación que inspiran a ambos órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano, y estableció la temática de la próxima reunión conjunta entre la Corte y la Comisión, a celebrarse el día de 8 de marzo de 2001, en esta ciudad de Washington DC., de conformidad con el mandato de la Asamblea General de la OEA.

Al final de la reunión del día 18 de noviembre de 2000 en San José de Costa Rica, los Presidentes de la Corte y de la Comisión, Juez A.A. Cançado Trindade y Sr. Hélio Bicudo, enviamos una carta conjunta al Secretario General de la OEA, Sr. César Gaviria Trujillo, informándole de los temas acordados para consideración por ambos órganos, entre los cuales se incluyeron los siguientes: a) fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos; b) agilización del proceso de reforma de sus Reglamentos, mandato con el cual ya cumplieron tanto la Corte como la Comisión; c) coordinación continua entre ambos órganos del sistema para el fiel desempeño de sus funciones; d) cumplimiento de las sentencias y otras decisiones de la Corte, y las recomendaciones de la Comisión; e) búsqueda conjunta de mejor financiación para la operación de ambos órganos de protección. Asimismo, la referida carta hizo mención a la necesidad de obtener los recursos humanos y económicos adicionales que van a necesitar ambos órganos para un mejor cumplimiento de sus obligaciones convencionales en los próximos años.

De conformidad con lo decidido en la reunión del 18 de noviembre pasado, la Corte y la Comisión en pleno se reunieron en esta ciudad de Washington DC., el día de ayer, 08 de marzo, para examinar los temas anteriormente mencionados. Los dos órganos sostuvieron un fructífero debate profundizado, sobre todo acerca de la aplicación futura de los nuevos Reglamentos adoptados por ambos, así como sobre el fortalecimiento de la supervisión del cumplimiento por los Estados de las sentencias de la Corte y las recomendaciones de la Comisión.

Al final de la reunión de ayer, los Presidentes de la Corte y de la Comisión, Juez A.A. Cançado Trindade y Sr. Claudio Grossman, enviamos una carta conjunta al Secretario General de la OEA, Sr. César Gaviria Trujillo, informándole al respecto, solicitando recursos adicionales de la OEA para que ambos órganos puedan desempeñar fielmente su labor (hasta que dichos recursos alcancen al menos un 10% del presupuesto regular de la Organización), y resaltando la importancia de que los Estados de la región incorporen la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en su derecho interno y de que sus Poderes Judiciales utilicen más ampliamente la jurisprudencia internacional en materia de protección de los derechos humanos.

V. Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

Con el objetivo de dar continuidad a las actividades de alto nivel diseñadas para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, iniciadas el año de 1999, con la realización de dos reuniones de expertos durante los meses de septiembre y noviembre de aquel año, además del Seminario "*El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI*", que tuvo lugar en San José de Costa Rica en noviembre de 1999, la Corte celebró, en el año 2000, dos nuevas reuniones de expertos, con el fin de identificar criterios sobre los pasos que deben darse para fortalecer el sistema interamericano de protección derechos humanos.

Dichas reuniones se llevaron a cabo en la sede de la Corte, bajo mi coordinación, durante el mes de febrero de 2000. En esas reuniones participaron los Jueces de la Corte, Miembros de la Comisión, y altas personalidades en el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tengo la satisfacción de comunicar a las Señoras y Señores Embajadores y Representantes de los Estados que, al final de mi exposición, estará circulando a todos Ustedes, los primeros ejemplares, que acaban de imprimirse, del primer tomo de actas (en 750 páginas) del reciente Seminario sobre "*El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI*", que comprueba el poder de convocatoria de la Corte y representa uno de sus aportes al fortalecimiento del sistema interamericano de protección.

Es para mí motivo de particular satisfacción que el lanzamiento oficial de esta publicación histórica se efectúe en la sede de nuestra Organización regional, y en el seno de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.

Asimismo, sobre el tema del fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo *Ad Hoc* sobre los Derechos Humanos, creado por los Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1999, se reunió los días 10 y 11 de febrero de 2000, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con el fin de recomendar las medidas concretas para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En dicha reunión, tuve el honor de representar a la Corte, en compañía de su Secretario, Manuel E. Ventura Robles; en la ocasión, informé al referido Grupo *Ad Hoc* sobre las conclusiones alcanzadas en las dos actividades organizadas por la Corte que acabo de mencionar. Cabe recordar que las recomendaciones del Grupo *Ad Hoc* fueron aprobadas por la XXX Asamblea General de la OEA (celebrada en junio de 2000, en Windsor, Canadá); una recomendación del Grupo *ad hoc* acogida por la Asamblea General fue precisamente la de las reformas a los reglamentos de la Corte y la Comisión, lo que hoy, como ya expresé, ya es una realidad, que contribuirá a impulsar el perfeccionamiento de nuestro sistema de protección.

Del 13 al 17 de marzo de 2000, invitado por su entonces Presidente, Embajador Claude Heller, Representante Permanente de México ante la OEA, visité esta misma Comisión de

Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, para relatar, el día 16 de marzo, los recientes aportes de la Corte sobre la reforma y el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos². La visita fue aprovechada además, para reunirme con los diversos Embajadores de países de Centroamérica, América del Sur, El Caribe y América del Norte acreditados ante la OEA, así como con varios altos funcionarios de la OEA.

Posteriormente, el 13 de abril de 2000, volví a hacer uso de la palabra ante esta Comisión de la OEA, con el propósito de presentar el *Informe Anual* de labores de la Corte referente a 1999, el cual fue acogido con gran satisfacción. En este sentido, los miembros de la Comisión se manifestaron favorables a que se reintegraran por lo menos US\$100,000.00 de los US\$150,500.00 recortados al presupuesto de la Corte para el año 2000, para que el Tribunal pudiera celebrar, al menos, tres sesiones durante el año 2000, así como traducir y publicar su *Informe Anual* correspondiente a ese año.

En esa oportunidad, los Srs. Representantes de los Estados expresaron su deseo de que se incrementara el presupuesto de la Corte a partir del año 2001, ya que éste se encontraba congelado desde el año 1998. En la misma ocasión también me reuní con el Secretario General de la OEA, Sr. César Gaviria Trujillo, con su asesor en materia de derechos humanos, Sr. Peter Quilter, con algunos Embajadores Representantes Permanentes ante la OEA, así como con varios representantes de agencias de cooperación con sede en la ciudad de Washington, DC., con las cuales la Corte ha mantenido relaciones.

VI. Adopción del Nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000, la Corte Interamericana adoptó, mediante Resolución del 24 de noviembre del mismo año, su nuevo Reglamento, con miras a adecuar las normas que rigen sus procedimientos a los requisitos de una más eficaz garantía de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Este Reglamento entrará en vigor el 01 de junio de 2001. Para contextualizar los significativos cambios introducidos en este nuevo Reglamento, - el cuarto de su historia, - cabe recordar que la Asamblea General de la OEA del año 2000, realizada en Windsor, Canadá, adoptó una resolución³ acogiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo *Ad Hoc* sobre Derechos

2 Cf. OEA, *Informe del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, Juez Antônio A. Cançado Trindade, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en el Marco del Diálogo sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (16 de marzo de 2000), documento OEA/Ser.G/CP/CAJP-1627/00, del 17.03.2000, reproducido in: OEA, *Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - 2000*, Anexo XLIX, pp. 657-687.

3 OEA/A.G., resolución AG/RES.1701 (XXX-0/00), de 2000.

Humanos de Representantes de los Cancilleres de los países de la región (que se reunió en San José de Costa Rica, en febrero de 2000).

Dicha resolución de la Asamblea General de la OEA, *inter alia*, encomendó a la Corte Interamericana, tomando en consideración los *Informes* que presenté, en representación de la Corte, a los órganos de la OEA los días 16 de marzo, 13 de abril, y 06 de junio de 2000⁴, a que considerara la posibilidad de: a) "permitir la participación directa de la víctima" en el procedimiento ante la Corte (una vez sometido el caso a su competencia), "teniendo en cuenta la necesidad tanto de preservar el equilibrio procesal, como de redefinir el papel de la CIDH en dichos procedimientos"; y b) evitar la "duplicación de procedimientos" (una vez sometido el caso a su competencia), en particular "la producción de la prueba, teniendo en cuenta las diferencias de naturaleza" entre la Corte y la CIDH.

Las modificaciones introducidas por la Corte en su nuevo Reglamento incidieron, efectivamente, en la racionalización de los actos procesales, en materia probatoria y medidas provisionales; pero la modificación de mayor trascendencia consistió en el otorgamiento de participación directa de las presuntas víctimas, sus familiares, o sus representantes, en *todas* las etapas del procedimiento ante la Corte (cf. *infra*). En su Reglamento de 2000, la Corte introdujo una serie de disposiciones, sobre todo en relación con las excepciones preliminares, la contestación de la demanda y las reparaciones, con miras a asegurar una mayor celeridad y agilidad en el proceso ante ella. La Corte tuvo presente el viejo adagio "*justice delayed is justice denied*"; además, al lograr un proceso más expedito, sin perjuicio de la seguridad jurídica, se evitarían costos innecesarios, en beneficio de todos los actores involucrados en los casos contenciosos ante la Corte.

En este espíritu, en lo que a las excepciones preliminares se refiere, mientras que el anterior Reglamento de 1996 disponía que debían ellas ser opuestas dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la demanda, el Reglamento de 2000 determina que dichas excepciones sólo podrán ser interpuestas en el escrito de contestación de la demanda (artículo 36). Además, a pesar de que en la etapa de excepciones preliminares aplícate el principio *reus in excipiendo fit actor*, el Reglamento de 2000 establece que la Corte podrá convocar una audiencia especial sobre excepciones preliminares cuando lo considere indispensable, i.e., podrá, dependiendo de las circunstancias, prescindir de la audiencia. Y si bien la práctica de la Corte hasta la fecha ha sido la de emitir primeramente una sentencia sobre excepciones preliminares, y, si desestimadas éstas, posteriormente una sentencia sobre el fondo, el Reglamento de 2000 dispone, a la luz del principio de la economía procesal, que la Corte podrá resolver en una sola sentencia tanto las excepciones preliminares así como el fondo del caso (artículo 36).

A su vez, la contestación de la demanda, que bajo el anterior Reglamento de 1996 se debía realizar dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la demanda, bajo el

4 Reproducidos in: OEA, *Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - 2000*, doc. OEA/Ser.L/V/III.50-doc.4, San José de Costa Rica, 2001, pp. 657-790.

Reglamento de 2000 debe presentarse dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la demanda (artículo 37(1)). Esta, como otras reducciones de plazos, permite tramitar el proceso con mayor celeridad, en beneficio de las partes involucradas en el mismo. Asimismo, el Reglamento de 2000 establece que, en la contestación de la demanda, el Estado demandado deberá declarar si acepta los hechos denunciados y las pretensiones del demandante, o si los contradice; de ese modo, la Corte podrá considerar como aceptados los hechos no expresamente negados y las pretensiones no expresamente controvertidas (artículo 37(2)).

En materia probatoria, teniendo presente una recomendación de la Asamblea General de la OEA (cf. *supra*), la Corte introdujo en su Reglamento de 2000 una disposición según la cual las pruebas rendidas ante la CIDH deben ser incorporadas al expediente del caso ante la Corte, siempre y cuando hayan ellas sido recibidas en procedimientos contradictorios, salvo que la Corte considere indispensable repetir las. Con esta innovación la Corte pretende evitar la repetición de actos procesales, con miras a aligerar el proceso y economizar sus costos. Al respecto, hay que tener siempre presente que las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, están en capacidad de aportar, durante todo el proceso, sus solicitudes, argumentos y pruebas de forma autónoma (artículo 43).

Según el nuevo y cuarto Reglamento de la Corte, podrá ésta disponer la acumulación de casos conexos entre sí, en cualquier estado de la causa, siempre que exista identidad de partes, objeto y base normativa entre los casos a acumular (artículo 28). Esta providencia también se enmarca en el propósito de racionalización del procedimiento ante la Corte. El Reglamento de 2000 dispone, además, que la presentación de las demandas, así como las solicitudes de opiniones consultivas, deberán ser transmitidas, además de al Presidente y los demás Jueces de la Corte, también al Consejo Permanente de la OEA, a través de su Presidente; y, en cuanto a las demandas, deberán igualmente ser remitidas al Estado demandado, a la CIDH, al denunciante original y la presunta víctima, sus familiares o representantes debidamente acreditados (artículos 35(2) y 62(1)).

En cuanto a las medidas provisionales de protección, si bien la práctica de la Corte ha sido, hasta la fecha, la de celebrar - cuando estime necesario - audiencias públicas sobre dichas medidas, esta posibilidad no estaba presente en el Reglamento de 1996. A su vez, el nuevo Reglamento de 2000 incorpora una disposición que establece que la Corte, o su Presidente si ésta no estuviere reunida, podrá convocar las partes, si lo estima necesario, a una audiencia pública sobre las referidas medidas provisionales (artículo 25).

En materia de reparaciones, el Reglamento de 2000 determina que, entre las pretensiones expresadas en el escrito de la propia demanda, debe incluirse las referentes a las reparaciones y costas (artículo 33(1)). A su vez, las sentencias emitidas por la Corte deben contener, *inter alia*, el pronunciamiento sobre reparaciones y costas (artículo 55(1)(h)). De ese modo, una vez más se busca reducir la duración del proceso ante el Tribunal, a la luz del principio de la celeridad y economía procesales, y en beneficio de todos los interesados.

Tal y como recomendado por la Asamblea General de la OEA (cf. *supra*), la Corte introdujo en su nuevo Reglamento de 2000 una serie de medidas destinadas a otorgar a las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados, la participación directa (*locus standi in judicio*) en todas las etapas ante el Tribunal. En perspectiva histórica, es esta la modificación más trascendental del cuarto Reglamento de la Corte, además de un verdadero marco en la evolución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El anterior Reglamento de 1996 había dado el primer paso en esa dirección, al otorgar a las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes la facultad de presentar sus propios argumentos y pruebas en forma autónoma, específicamente en la etapa de reparaciones (artículo 23). Si las presuntas víctimas se encuentran al *inicio* del proceso (al ser supuestamente lesionadas en sus derechos), así como al *final* del mismo (como eventuales beneficiarios de las reparaciones), ¿por qué razón negar su presencia *durante* el proceso, como verdadera parte demandante? El Reglamento de 2000 vino a remediar esta incongruencia que perduró por más de dos décadas (desde la entrada en vigor de la Convención Americana) en el sistema interamericano de protección.

En efecto, con el Reglamento de 2000 de la Corte Interamericana, las presuntas víctimas, sus familiares o representantes podrán presentar solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante *todo* el proceso ante el Tribunal (artículo 23). Así, una vez que la Corte notifica la demanda a la presunta víctima, sus familiares o representantes, les otorga a éstos un plazo de 30 días para la presentación, en forma autónoma, de los escritos conteniendo sus solicitudes, argumentos y pruebas (artículo 35(4)). Asimismo, durante las audiencias públicas, podrán ellos hacer uso de la palabra para la presentación de sus argumentos y pruebas, debido a su condición de verdadera parte en el proceso (artículo 40(2))⁵. Con este relevante avance, queda en fin aclarado que las verdaderas partes en un caso contencioso ante la Corte son los individuos demandantes y el Estado demandado, y, sólo procesalmente, la Comisión Interamericana (artículo 2(23)).

Con el otorgamiento del *locus standi in judicio* a las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, en todas las etapas del proceso ante la Corte, pasan ellos a disfrutar de todas las facultades y obligaciones, en materia procesal, que, hasta el Reglamento de 1996, eran privativos únicamente de la Comisión y del Estado demandado (excepto en la etapa de reparaciones). Esto implica que, en el procedimiento ante la Corte, podrán existir, o coexistir, tres posturas distintas: la de la presunta víctima (o sus familiares o representantes), como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; la de la Comisión, como órgano auxiliar de la Corte; y la del Estado demandado.

5 En cuanto a la demanda de interpretación, será comunicada por el Secretario de la Corte a las partes en el caso - incluidas naturalmente las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, - para que presenten los alegatos escritos que estimen pertinentes, dentro de un plazo fijado por el Presidente de la Corte (artículo 58(2)).

Esta histórica reforma introducida en el Reglamento de la Corte sitúa a los distintos actores en perspectiva correcta; contribuye a una mejor instrucción del proceso; asegura el principio del contradictorio, esencial en la búsqueda de la verdad y la prevalencia de la justicia bajo la Convención Americana; reconoce ser de la esencia del contencioso internacional de los derechos humanos la contraposición directa entre los individuos demandantes y los Estados demandados; reconoce el derecho de libre expresión de las propias presuntas víctimas, el cual es un imperativo de equidad y transparencia del proceso; y, *last but not least*, garantiza la igualdad procesal de las partes (*equality of arms/égalité des armes*) en todo el procedimiento ante la Corte⁶.

VII. Visitas de Presidentes Latinoamericanos a la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 4 de abril de 2000 recibí, en compañía del Juez Alirio Abreu Burelli, en San José de Costa Rica, al Excmo. Sr. Presidente de la República Federativa del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, acompañado por una comitiva de alto nivel. Con motivo de esta visita, al día siguiente recibimos, en la sede del Tribunal, al Secretario de Estado de Derechos Humanos, Sr. José Gregori, acompañado del Director del Departamento de Derechos Humanos y Temas Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Marco Antônio Diniz Brandão, y del Diputado Ney Lopes, en representación del Parlamento Latinoamericano.

El 29 de mayo de 2000, en mi condición de Presidente de la Corte, recibí al Excmo. Sr. Presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango, en la sede de la Corte, acompañado por una comitiva de alto nivel que incluyó al Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Sr. Guillermo Fernández de Soto y al Embajador de Colombia en San José de Costa Rica, Sr. Julio Aníbal Riaño Velandía. La comitiva del Presidente Andrés Pastrana fue acompañada en la ceremonia en la Corte por el Excmo. Sr. Presidente de la República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, entre otras autoridades costarricenses.

Asimismo, el 12 de septiembre de 2000, recibí en nombre de la Corte, en la sede del Tribunal, al Excmo. Sr. Presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, al Excmo. Sr. Presidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía Domínguez, y al Excmo. Sr. Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, acompañados por altas autoridades de sus ilustres comitivas, así como del país sede de la Corte.

6 Cf. A.A. Cañado Trindade, "El Nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000): El Ser Humano como Sujeto del Derecho Internacional", *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos* (2001), número especial (en prensa). Y cf., anteriormente, A.A. Cañado Trindade, "El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (1948-1995): Evolución, Estado Actual y Perspectivas", in *Derecho Internacional y Derechos Humanos/Droit international et droits de l'homme* (Libro Conmemorativo de la XXIV Sesión del Programa Exterior de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, San José de Costa Rica, abril/mayo de 1995), La Haya/San José, IIDH/Académie de Droit International de La Haye, 1996, pp. 47-95; A.A. Cañado Trindade, "The Procedural Capacity of the Individual as Subject of International Human Rights Law: Recent Developments", in *Karel Vasak Amicorum Liber - Les droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle*, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 521-544.

Hace poco, el 5 de diciembre de 2000, también recibí en la sede de la Corte al Excmo. Sr. Presidente de la República Argentina, Fernando de la Rúa, acompañado por una comitiva de alto nivel que incluyó al Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Sr. Adalberto Rodríguez Giavarini y al Embajador de Argentina en San José de Costa Rica, Sr. Manuel María Pinto. La comitiva del Presidente Fernando de la Rúa fue acompañada en la ceremonia en la Corte por el Excmo. Sr. Presidente de la República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, y por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Ingeniero Roberto Rojas López, entre otras autoridades.

Todas las visitas presidenciales anteriormente citadas, precedidas por la visita del Excmo. Sr. Presidente del Paraguay el año anterior, representan un serie de eventos históricos para el Tribunal, confirmando una muy saludable tendencia de acercamiento respetuoso y diálogo constructivo entre los Estados, que han creado el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y los órganos encargados de velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos atinentes a la protección de los derechos de la persona humana en el hemisferio.

Los Señores Presidentes de la República de los países mencionados resaltaron, durante sus respectivas visitas, la contribución de la Corte Interamericana, a través de su jurisprudencia y doctrina, a la defensa de la dignidad humana y al restablecimiento de los derechos de los individuos que han sido vulnerados en los casos por ella decididos. También destacaron que las sentencias y opiniones consultivas de la Corte han logrado que los países de la región tomen iniciativas en el sentido de adecuar sus legislaciones nacionales a la normativa internacional de protección. Asimismo, mencionaron el importante avance que ha representado la Convención Americana, al constituir un instrumento básico en la protección de los derechos fundamentales del ser humano, y al reflejar fielmente las aspiraciones de los pueblos de la región en materia de ejercicio de la democracia representativa y de prevalencia del Estado de Derecho.

También resaltaron los Señores Presidentes de la República, durante sus visitas, el deber de los Estados americanos de fortalecer el papel de la Corte Interamericana en el hemisferio. Asimismo, destacaron que la ratificación de la Convención Americana y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte debe ser universal para consolidar el sistema regional de protección. En fin, subrayaron la importancia de que los Estados Partes en la Convención Americana acepten integralmente los fallos de la Corte, dando fiel cumplimiento a los mismos, y enfrenten el problema del financiamiento del sistema regional de protección de los derechos humanos.

VIII. XXX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (Junio de 2000)

La Asamblea General de la OEA celebró, del 04 al 06 de junio de 2000, su XXX Período Ordinario de Sesiones en Windsor, Canadá. La Corte Interamericana estuvo representada por mi persona en calidad de Presidente, por su Vicepresidente, Juez Máximo Pacheco Gómez, y

por el Secretario de la Corte, Manuel E. Ventura Robles. Allí presenté a la Asamblea General el *Informe Anual* de labores del Tribunal, correspondiente al año 1999, el cual fue por ella aprobado mediante la Resolución AG/RES.1716 (XXX-O/00). En aquella, las Delegaciones de 9 Estados hicieron uso de la palabra, en la Comisión General de la Asamblea, en apoyo a las labores de la Corte. El martes 06 de junio de 2000, la Asamblea General reeligió, en sus funciones, por aclamación, para un nuevo mandato de 6 años, a los Jueces Antônio A. Cançado Trindade (Brasil), Oliver Jackman (Barbados) y Alirio Abreu Burelli (Venezuela), para el período que empezó el 01 de enero de 2001 y se extenderá el 31 de diciembre de 2006.

IX. Presupuesto de la Corte

La Asamblea General de la OEA aprobó, en su XXVII Período Extraordinario de Sesiones realizado en la ciudad de Washington D.C., el 12 de octubre de 2000, el presupuesto de la Corte para el año 2001 por un monto de US\$1,284,700.00 (un millón doscientos ochenta y cuatro mil setecientos dólares de los Estados Unidos de América). Aunque esta cifra representó un incremento sensible en el presupuesto de la Corte, debo señalar que este monto no es suficiente ante las necesidades crecientes del Tribunal, por lo que el proyecto de presupuesto para el año 2002, ya presentado por la Corte a consideración de los órganos competentes de la Organización, incluye un nuevo aumento que esperamos sea aprobado por la Asamblea General en su próximo período de sesiones, que se realizará en San José de Costa Rica a principios del mes de junio del presente año.

Aunque el presupuesto de la Corte Interamericana es financiado por la OEA, también cuenta el Tribunal con una partida que ha donado el Gobierno de Costa Rica a la Corte por un monto anual de US\$ 100,000.00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América), como parte de su compromiso al firmar el Convenio de Sede en 1983. Este monto ya ha sido aprobado por el Gobierno de Costa Rica en el presupuesto del año 2001.

En relación con el proyecto de presupuesto de la Corte para el próximo año, se ha solicitado un incremento sustancial con el propósito de cubrir los costos más altos de operación del Tribunal y su Secretaría, debido a que, con la reciente reforma del Reglamento de la Corte, que otorga *locus standi in judicio* a las presuntas víctimas en todas las etapas del procedimiento ante el Tribunal, ya no comparecerán sólo la Comisión y el Estado demandado, sino también los individuos peticionarios como verdadera parte demandante. El incremento fue solicitado también porque el Tribunal considera que, debido al número de casos pendientes ante el Tribunal, - 30 casos contenciosos como fue mencionado, pero que podrán aumentar hasta el final de 2001,- ha llegado el momento de solventar, en definitiva, las limitaciones de los recursos de la Corte, que incluyen la carencia de profesionales en su Secretaría y el nivel salarial de remuneración de los mismos.

Como ya lo he señalado anteriormente, los Jueces de la Corte no reciben un salario por el trabajo que realizan, no solamente en los períodos de sesiones, cuando se encuentran en la sede del Tribunal, sino tampoco cuando estudian los expedientes y preparan los proyectos en

los respectivos domicilios en sus países de origen. El sistema de honorarios por labor realizada en la sede del Tribunal es manifiestamente inadecuado, siendo en la actualidad el único tribunal internacional que todavía lo tiene. Debe darse prioridad al financiamiento, para el establecimiento de una Corte semi-permanente, seguida de una Corte permanente, con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. Me permito agregar que, con el considerable aumento en el número de casos pendientes ante la Corte, nunca una generación de Jueces ha sido tan exigida como la actual, a pesar de la referida carencia de recursos.

En los próximos días solicitaremos formalmente ante la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la OEA una cita para explicar los alcances de este proyecto de presupuesto a los señores representantes. Tenemos la seguridad de que nuestra petición será atendida, como le corresponde a un tribunal internacional de la más alta jerarquía en nuestro sistema regional de protección, ya que el trabajo de la Corte Interamericana se defiende por sí mismo, debido al alto nivel profesional y técnico de sus sentencias y otras decisiones.

Mucho agradeceríamos a los Srs. Representantes de los Estados aquí presentes que sus buenos oficios junto a los Delegados acreditados ante la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, en el sentido de asegurar esta cita durante la primera semana del próximo mes de abril, en que regresaré a Washington D.C. para presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, como ya acordado con la Sra. Presidenta de esta Comisión, el parecer de la Corte sobre el proceso de reforma y fortalecimiento de nuestro sistema regional de derechos humanos, en el marco del Diálogo de la CAJP sobre dicho sistema.

X. Auditoria de los Estados Financieros de la Corte

Como ya es sana costumbre de la Corte, actualmente se está practicando una auditoria a sus estados financieros, correspondientes al período fiscal del año 2000, por parte de la firma de Auditores Externos Independientes Venegas, Pizarro, Ugarte y Co., Contadores Públicos Autorizados, representantes en Costa Rica de la firma HLB International. La auditoria comprende tanto los fondos provenientes de la OEA como del aporte del Estado de Costa Rica para el mismo período. Copia del informe de dicha auditoria será enviado oportunamente al Departamento de Servicios Financieros de la OEA y al Inspector General de la Organización, como ha sido la práctica de la Corte a lo largo de los años.

XI. Donaciones y Acuerdos de Cooperación Internacional

En una ceremonia efectuada el día 5 de junio de 2000 en Windsor, Canadá, durante la celebración del XXX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Embajador Luiz Felipe Palmeira Lampreia, entregó a la Corte, una contribución voluntaria de US\$50,000.00 para fortalecer las actividades institucionales del Tribunal. En esa oportunidad agradecí la donación al señor Canciller del Brasil y destacué la importancia de la misma, en un momento en que la propia OEA está en

búsqueda de recursos adicionales para fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En dicha ceremonia estuvieron también presentes el Embajador Carlos Alberto Leite Barbosa, ex Representante Permanente del Brasil ante la OEA, así como todos los miembros de la Delegación del Brasil ante la Asamblea General de la OEA. Por la Corte, estuvieron presentes el Vicepresidente, Juez Máximo Pacheco Gómez y el Secretario, Sr. Manuel E. Ventura Robles.

El 18 de agosto de 2000 se realizó la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Corte que ocupan la Biblioteca Conjunta de la Corte y el Instituto Interamericano de Derecho Humanos, el Centro de Documentación del Instituto Interamericano y la Unidad Editorial del Tribunal. En ella estuvieron presentes, como invitados del Tribunal, además de los Jueces y personal de la Secretaría de la Corte, el Excmo. Sr. Presidente de la República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; la Segunda Vicepresidenta de la República de Costa Rica, Sra. Elizabeth Odio Benito; el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Ingeniero Roberto Rojas López; la Ministra de Justicia, Licenciada Mónica Nagel; el Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Sr. Roberto Cuéllar, y miembros del Consejo Directivo de dicho Instituto y del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de Costa Rica.

En la ocasión, agradecí al Gobierno del país sede por este valioso apoyo, por medio del cual se logró duplicar el patrimonio de la Corte Interamericana, estableciendo las bases materiales para el establecimiento de una futura Corte Interamericana a operar en base permanente. Finalmente se develó una placa de agradecimiento de la Corte a la República de Costa Rica por haber conseguido, de la cooperación internacional, los fondos necesarios para adquirir el edificio; acto seguido, las autoridades presentes hicieron un recorrido por las instalaciones de la nueva Biblioteca, la más completa del continente americano en materia de derechos humanos.

En lo que a acuerdos de cooperación internacional se refiere, la Corte firmó, durante el año 2000, diversos acuerdos y convenios de importancia, con reconocidas instituciones dedicadas a la protección y promoción de los derechos humanos, a saber: el Instituto Internacional de Derechos Humanos (de Estrasburgo), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y Centro Internacional Bancaja para la Paz y el Desarrollo de la Fundación Caja Castellón, en España.

Asimismo, se dio seguimiento a la implementación de los convenios suscritos en años anteriores con la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad Carlos III de Madrid, el Centro Danés para los Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Escuela Nacional de la Magistratura del Brasil.

XII. Relaciones con otros Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos

En el transcurso del año 2000, la Corte mantuvo constante contacto y colaboración con diversos organismos dedicados a la protección de los derechos humanos. Entre estas actividades, cabe resaltar, las reuniones sostenidas con el Presidente, Jueces y personal de la Corte Europea de Derechos Humanos en los meses de julio y octubre pasados, en Estrasburgo. La próxima reunión entre Jueces de los dos Tribunales internacionales de derechos humanos se realizará en San José de Costa Rica, en junio de 2001.

De la misma manera, se llevaron a cabo actividades conjuntas, de enseñanza y capacitación, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), todas en la sede de la Corte; además, en la misma sede del Tribunal se recibió la visita de una delegación del Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, de Suecia.

XIII. Conclusiones

Quisiera concluir la presentación de este *Informe Anual* de la Corte, referente al año 2000, con un mensaje positivo a los Srs. Representantes de los Estados aquí presentes, tanto de parte mía como de mis colegas del Tribunal. Me permito expresarles, tal como señalé al inicio de mi exposición, la confianza que tiene la Corte Interamericana en los Estados Partes en la Convención Americana como garantes de la misma. Cabe destacar, en este sentido, como hechos notables:

- *Primero*, el aumento en el número de Estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, con los recientes reconocimientos de República Dominicana, Haití, México, Brasil y Barbados;

- *Segundo*, el aporte positivo al sistema interamericano de protección que han dado, en los últimos años, varios Estados ante la Corte, los que se han allanado total o parcialmente a las respectivas demandas, aceptando los hechos y su responsabilidad internacional; cabe recordar, en este sentido, los ejemplos alentadores de Suriname (caso *Aloeboetoe*), Venezuela (casos *El Amparo y del Caracazo*), Argentina (casos *Maqueda y Garrido y Baigorria*), Ecuador (caso *Benavides Cevallos*), Bolivia (caso *Trujillo Oroza*), Guatemala (caso *Blake*), recientemente, hace algunos días, el Perú (caso *Barrios Altos*); a ésto se agrega el espíritu de cooperación y lealtad procesales demostrado por otros Estados demandados ante la Corte, revelando en forma inequívoca la confianza depositada en la labor de ésta;

- *Tercero*, los recientes acontecimientos ocurridos en el Perú, y las recientes decisiones tomadas por su actual Gobierno, que prometen superar los eventos que distanciaban el Estado peruano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, con el con-

secuente fortalecimiento de la Corte, en un momento en que gana cada vez mayor espacio el ideal de la realización de la justicia a nivel internacional;

- *Cuarto*, el apoyo irrestricto que durante más de 20 años ha constantemente dado a la Corte el país sede, Costa Rica, inclusive financieramente, al cual se suman las recientes donaciones de México y Brasil al Tribunal, destinadas a la actualización de sus publicaciones oficiales, ya que el presupuesto de la OEA no contemplaba fondos para la edición y divulgación de la jurisprudencia de la Corte desde hace muchos años;

- *Quinto*, las recientes visitas históricas, a la sede la Corte, de los Excmo. Srs. Presidentes de la República de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, y República Dominicana, fomentando el diálogo constructivo, al más alto nivel, entre los Estados Partes en la Convención Interamericana y la Corte Interamericana;

- *Sexto*, la comprobación del poder de convocatoria de la Corte, para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, con la participación de varios de los más distinguidos juristas del mundo, expertos en la temática de los derechos humanos, que concurrieron al Seminario y a las cuatro Reuniones de Expertos organizados por la Corte, y la divulgación, el día de hoy en la OEA, del primer tomo de actas del referido Seminario sobre "*El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI*";

- *Séptimo*, la aprobación del nuevo Reglamento de la Corte Interamericana, el que se orienta decididamente en el sentido de una plena participación de las presuntas víctimas - como parte demandante - en todas las etapas del proceso contencioso ante la Corte Interamericana, como sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos dotados de plena capacidad jurídica internacional.

La Corte reitera su firme apoyo a la labor de esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, presidida por la Sra. Embajadora Margarita Escobar, de El Salvador, en cuanto a la iniciativa del seguimiento al Diálogo sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El jueves 05 de abril del presente año, tendré el honor y privilegio de volver a dirigirme a Ustedes, Representantes de los Estados Miembros de la OEA, con el fin de exponer el parecer y las recomendaciones de la Corte sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Hemos impulsado iniciativas en pro del fortalecimiento de la salvaguardia internacional de los derechos de la persona humana en nuestra parte del mundo, concientes de que las instituciones que no acompañan la evolución de los tiempos se estancan. Urge contar con los recursos humanos y materiales adicionales, indispensables para la realización plena de lo que a veces parece ser, en nuestro continente, todavía una utopía. Pero ante las brutalidades del mundo contemporáneo, no podemos vivir sin utopías, necesitamos al menos refugiarnos en ellas, si deseamos realmente buscar los medios de construir, para las generaciones futuras, un mundo mejor del que encontramos. Confío en que, todos juntos, podamos seguir adelante impulsando

la evolución irreversible de la protección internacional de los derechos humanos en nuestra región, para que la realidad de mañana pueda reflejar fielmente lo que sigue pareciendo hoy una utopía. Tenemos, en suma, que actuar a la altura de los desafíos de nuestros tiempos, para atender a la nueva dimensión de las necesidades de protección del ser humano en este inicio del siglo XXI.

Señora Presidenta, Señoras y Señores Embajadores y Representantes, en mi nombre, y en el de los Jueces Máximo Pacheco Gómez, Hernán Salgado Pesantes, Alirio Abreu Burelli, Sergio García Ramírez y Carlos Vicente de Roux Rengifo, así como en el del Secretario, Manuel E. Ventura Robles, y en el del Secretario Adjunto, Renzo Pomi, quienes me acompañan en este acto, así como del Juez Oliver Jackman, quien no pudo venir a Washington DC., les agradezco por la atención con que me han distinguido en esta ocasión al escuchar la presentación del *Informe Anual* de la Corte Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al año 2000, - la primera presentación de las labores de la Corte en el siglo XXI. Muchas gracias a todos.

Washington, D.C.,
9 de marzo de 2001.

PERMANENT COUNCIL OF THE
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
COMMITTEE ON JURIDICAL AND POLITICAL AFFAIRS

OEA/Ser.G
CP/CAJP-1770/01
16 March 2001
Original: Spanish

REPORT OF THE PRESIDENT OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN
RIGHTS, JUDGE ANTÔNIO A. CANÇADO TRINDADE, TO THE COMMITTEE ON
JURIDICAL AND POLITICAL AFFAIRS OF THE PERMANENT COUNCIL OF
THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

(Washington, D.C., March 9, 2001)

Madam Chair of the Committee on Juridical and Political Affairs of the OAS,
Ambassador Margarita Escobar,

Honorable Ambassadors and Representatives of OAS member states,

It is now nearly a year since I had the honor, on Thursday, April 13, 2000, to appear, together with Judge Alirio Abreu Burelli and the Secretary, Manuel E. Ventura Robles, before this Committee on Juridical and Political Affairs (CJPA) of the Permanent Council of the Organization of American States (OAS), which was presided over at that time by Ambassador Claude Heller, Permanent Representative of Mexico to the OAS. On that occasion, I made a detailed presentation of the 1999 *Annual Report*, in my capacity as President of the Inter-American Court of Human Rights, after which 16 delegations took the floor to express support for the Court because of the great deal of work it had done that year and to state their wish that the Organization would maintain its support for the Court.

Today, March 9, 2001, accompanied by the Vice-President and four other Judges of the Court, as well as by the Secretary and other members of the Court's Secretariat, I have the honor to once again address the representatives of OAS member states, this time to present to this same Committee of the Permanent Council, the *Annual Report* of the Court for 2000. This report was sent to the OAS on February 17, 2001 and distributed to the delegations present here.

The attendance, at my current presentation to the OAS, of five of my fellow judges of the Court, who kindly arranged to come with me to Washington, D.C., is of symbolic value: in addition to demonstrating the collegial spirit that inspires our work together, it attests to the importance that our Court attributes to the role of the States Party to the American Convention

on Human Rights as the guarantor, in its capacity as last instance, of our regional system of protection. The notion of *collective protection*, exercised jointly by all the States Party, underlies both the American Convention and all human rights treaties.

Let me now turn to a narration of the activities of the Court during 2000. The salient aspects of my *Report* can be summarized as follows.

I. Submission of new disputes and provisional measures

In the course of 2000, three new disputes were submitted for consideration by the Inter-American Court, namely: the cases of *Constantine et al* and *Benjamin et al* against Trinidad and Tobago and the case of *Barrios Altos* against Peru. In addition, two petitions were submitted for provisional protective measures: the case of *Haitians and Dominicans of Haitian Origin in the Dominican Republic* and the case of the *Community of Paz de San José de Apartadó* regarding Colombia. In addition, three resolutions on provisional protective measures were adopted, in the cases of the *Constitutional Court*, *Ivcher Bronstein*, and *Loayza Tamayo*, all concerning Peru.

II. Sessions

The Court held three regular sessions and one special session in 2000. In those sessions,¹ / the following activities took place: 11 public hearings on provisional measures, preliminary exceptions, substance, reparations, and a request for interpretation of judgment on substance; rulings were handed down on preliminary exceptions in the cases of *the Mayagna (Sumo) Awás Tingni Community* against Nicaragua and *Las Palmeras* against Colombia; basic judgment in the cases of *Durand and Ugarte* and *Cantoral Benavides*, both against Peru, *Trujillo Oroza* against Bolivia, and *Bámaca Velásquez* against Guatemala; a ruling on interpretation of a judgment on substance in the case of *Cesti Hurtado* against Peru; resolutions on enforcement of judgment in the cases of *El Amparo* against Venezuela and *Garrido and Baigorria* against Argentina; resolutions on practice of proof within the state (exhumation of the bodies of two of the presumed victims) in the case *Las Palmeras*; resolutions on the requirement for the state to find the family members of various victims so that they can participate in the reparations phase in the cases of *Villagrán Morales et al* (case of the "Street Children") against Guatemala and of the *Caracazo* against Venezuela; seven resolutions were issued on the provisional measures adopted in *Álvarez et al* and *Clemente Teherán et al*, both with respect to Colombia; *James et al* with respect to Trinidad and Tobago; *Colotenango* and *Blake*, both with respect to Guatemala; the provisional measures mentioned above were adopted in the cases of *Haitians and Dominicans of Haitian Origin in the Dominican Republic*, in the cases of the *Constitutional Court* and *Ivcher Bronstein* with respect to Peru, and in the case of the *Community of Paz de*

¹ XLVII (January 24 to February 4), XLVIII (August 7-18), and XLIX (November 16-25) regular sessions; and XXIV (November 12-15) special sessions.

San José de Apartadó with respect to Colombia. In addition, the provisional measures ordered in the case of *Cesti Hurtado* with respect to Peru were lifted.

The Court currently has before it 30 disputes at different stages of proceedings, as well as 15 provisional protective measures. The Court reaffirms its commitment to dealing with this volume of work as quickly as possible, without prejudice to legal security, provided that its budget is not cut and that the increases requested for 2002 are granted—bearing in mind, of course, the limitations of its human and material resources and, especially, the fact that it is still not a permanent court. This has required increasing commitment from judges to meet more often and to assume with dedication new obligations that must be met at home (e.g., drafting judgments, more frequent communication with the Secretariat of the Court, and consultations with other Judges), all of these tasks being carried out without any monetary compensation owing to the fact that funds are not provided for these purposes.

III. Acceptance of the Court's jurisdiction to hear disputes

On the occasion of the thirtieth regular session of the OAS General Assembly in Windsor, Canada, a ceremony was held on Monday, June 5, 2000, at which Barbados recognized the jurisdiction of the Inter-American Court to hear disputes. This act, so important for consolidation of the Inter-American System for the Protection of Human Rights, was witnessed by the Minister of Foreign Affairs of Barbados, Ms. Billie A. Miller; the Secretary-General of the OAS, Mr. César Gaviria Trujillo; myself, as President of the Inter-American Court; the Vice-President, Judge Máximo Pacheco Gómez; the Secretary, Mr. Manuel E. Ventura Robles, and various Ambassadors and Permanent Representatives of the Caribbean States to the OAS.

May I recall that Peru, by a letter of July 9, 1999, submitted a document to the OAS General Secretariat in Washington, D.C., stating that it "was withdrawing the statement of recognition of the optional clause of submission to the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights to hear disputes." This withdrawal, as far as it was concerned, "was to take effect immediately and be applicable to all cases in which Peru had not responded to the petition brought before the Court." The Court examined the effect of this statement on the cases of *Ivcher Bronstein* and the *Constitutional Court* (rulings on jurisdiction, September 1999), declared inadmissible the claim of the Peruvian state that it was withdrawing with immediate effect its statement of recognition of the compulsory jurisdiction of the Court, and decided to continue hearing and processing both cases.

A few weeks ago (on January 12, 2001), Peru approved Legislative Resolution 27401 with a single article, stating: "Legislative Resolution 27152 is hereby revoked, and the Executive hereby undertakes to take all necessary steps to negate any results of said Legislative Resolution, hereby re-establishing in full for the Peruvian state, the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights to hear disputes."

The Court notes with great satisfaction the recent proposal of the organs of the Peruvian state to normalize relations with the Court, in accordance with the principles that inspired ratification of the American Convention and the good-faith implementation of this instrument of international human rights protection. This expression of the state's willingness to meet its freely contracted international obligations, which represents the return of the Peruvian state to its better legal tradition and thinking, was recently reiterated by His Excellency the Minister of Justice of Peru, Dr. Diego García-Sayán, during a visit to the headquarters of the Court on February 9, 2001. The Court feels confident that the Peruvian state will fully implement, within a reasonable time frame, all judgments handed down by the Court and pending enforcement.

Similarly, on the subject of the acceptance of the Court's jurisdiction, I would like to call—as I did in my last year's *Report*, on those states that have not yet done so, to ratify the American Convention on Human Rights and recognize the compulsory jurisdiction of the Inter-American Court in disputes, so that our human rights protection system can be enriched with universality of composition, in the regional sphere of its operation.

I am firmly convinced—as I have stated on various occasions—that the real commitment of a country to comply with internationally recognized human rights can be measured by its initiative and determination to become a Party to human rights treaties and to assume its contracted protection obligations enshrined in such treaties. In this area of protection, the same criteria, principles, and standards should be upheld by all states, which are legally equal, and should work to the benefit of all human beings, regardless of their nationality or any other circumstances.

Those states that have remained outside of the legal system of the American Convention on Human Rights have a historic debt to the inter-American system of protection, which must be redeemed. While all OAS member states have not ratified the American Convention, do not fully accept the jurisdiction of the Inter-American Court to hear disputes, and do not incorporate the substantive standards of the American Convention into their internal law, very little progress will be made in the genuine strengthening of the inter-American protection system. The international protection agencies can do little if the conventional standards for safeguarding human rights do not reach the bases of national societies. Consequently, I wish today to repeat my call, which respectful but resounding and which I hope will duly touch the juridical conscience of all OAS member states.

IV. Meeting of the governing bodies of the Court and the Inter-American Commission on Human Rights

On November 18, 2000, a meeting was held at the headquarters of the Inter-American Court in San José, Costa Rica, with the participation of the President and Vice-President of the Court, Judges Antônio A. Cançado Trindade and Máximo Pacheco Gómez; and the President and First Vice-President of the Commission, Commissioners Hélio Bicudo and Claudio Grossman. The meeting highlighted the close, harmonious relations of coordination that inspire both

human rights protection organs of the inter-American system and established the agenda for the next meeting between the Court and the Commission, scheduled for March 8, 2001, in this city of Washington D.C., in accordance with the directives of the OAS General Assembly.

At the end of the meeting of November 18, 2000 in San José, Costa Rica, the Presidents of the Court and the Commission, Judge A. A. Cançado Trindade and Mr. Hélio Bicudo, sent a joint letter to the OAS Secretary-General, Mr. César Gaviria Trujillo, informing him of the topics agreed upon for consideration by both bodies, including the following: (a) strengthening of the inter-American human rights protection system; (b) streamlining of the process of amending their Rules of Procedure—functions already carried out by both the Court and the Commission; (c) continuous coordination between the two organs of the system with a view to diligently carrying out their functions; (d) implementation of the judgments and other decisions of the Court, as well as of the recommendations of the Commission; (e) joint search for improved financing for the operation of both protection bodies. Mention was also made in the letter to the need to obtain the additional human and economic resources that the two bodies will need to improve compliance with their conventional obligations in the years to come.

As decided at the meeting of November 18, 2000, the Court and the Commission held a plenary meeting in this city of Washington, D.C., yesterday, March 8, to examine the above-mentioned topics. The two bodies held fruitful, in-depth discussions on everything pertaining to the future implementation of the new Rules of Procedure adopted by both of them and on the strengthening of the supervision of the states' compliance with rulings of the Court and recommendations of the Commission.

At the end of yesterday's meeting, the Presidents of the Court and the Commission, Judge A. A. Cançado Trindade and Mr. Claudio Grossman, sent a joint letter to the OAS Secretary-General, Mr. César Gaviria Trujillo, informing him of the above, requesting additional resources from the OAS to enable both bodies to carry out their work diligently (until those resources reach at least 10 percent of the Organization's regular budget), and stressing the importance for all states of the region to incorporate the standards of international law on human rights into their internal law and for their Judiciaries to make greater use of international jurisprudence as regards the protection of human rights.

V. Strengthening of the inter-American human rights protection system

To give continuity to the high-level activities designed to strengthen the inter-American human rights protection system, launched in 1999 with the holding of two meetings of experts in September and November 1999 and the seminar on "*The Inter-American Human Rights Protection System on the Threshold of the Twenty-first Century*," held in San José, Costa Rica, in November 1999, the Court held two meetings of experts in 2000 for the purpose of identifying criteria on the steps that must be taken to strengthen the inter-American human rights protection system.

These meetings were held at the headquarters of the Court under my coordination, in February 2000, with the participation of Judges of the Court, members of the Commission, and eminent persons in the field of international law on human rights. I am pleased to inform the Honorable Ambassadors and Representatives of member states that at the end of my presentation I will be circulating to you all, the first issues, just off the presses, of the first volume of the record (in 750 pages) of the recent seminar on "*The Inter-American Human Rights Protection System on the Threshold of the Twenty-first Century*," which is proof of the Court's assembling power and represents one of its contributions to the strengthening of the inter-American protection system.

For me, it is reason for particular satisfaction that this historic publication is being launched at the headquarters of our regional Organization and within its Committee on Juridical and Political Affairs.

Similarly, on the topic of the strengthening of the inter-American human rights protection system, the Ad Hoc Working Group on Human Rights created by the Ministers of Foreign Affairs in San José, Costa Rica, on November 22, 1999, met on February 10-11, 2000, at the Ministry of Foreign Affairs and Cult of Costa Rica, to recommend concrete steps for strengthening the inter-American human rights protection system. At that meeting, I had the honor to represent the Court, accompanied by its Secretary, Manuel E. Ventura Robles; on that occasion, I informed the Ad Hoc Working Group on the conclusions reached at the two activities organized by the Court that I have just mentioned. It should be borne in mind that the recommendations of the Ad Hoc Group were approved by the OAS General Assembly at its thirtieth regular session (held in June 2000, in Windsor, Canada); one of the recommendations of the Ad Hoc Group endorsed by the General Assembly was precisely the one in favor of amending the Rules of Procedure of the Court and the Commission, which is now a reality, as I already stated, and will go toward encouraging the improvement of our protection system.

March 3-17, 2000, at the invitation of its then President, Ambassador Claude Heller, Permanent Representative of Mexico to the OAS, I visited this Committee on Juridical and Political Affairs of the Permanent Council of the OAS on March 16 to report on the recent contributions of the Court on the reform and strengthening of the inter-American human rights protection system.² I also seized the opportunity of that visit to meet with the various Ambassadors of Central American, South American, Caribbean, and North American countries accredited to the OAS, as well as with various senior officials of the OAS.

² See OAS, *Report of the President of the Inter-American Court of Human Rights, Judge Antônio A. Cançado Trindade, to the Committee on Juridical and Political Affairs of the Permanent Council of the Organization of American States within the framework of the discussion on the inter-American human rights protection system* (March 16, 2000), document OEA/Ser.G/CP/CAJP-1627/00 of 3/17/2000, reproduced in OAS, *Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights, 2000*, Annex XLIX, pp. 657-687.

Later, on April 13, 2000, I once again spoke before this OAS Committee, to present the *Annual Report* on the work of the Court for 1999, which was received with great satisfaction. In this regard, members of the Committee expressed support for the return of at least US\$100,000.00 of the US\$150,500.00 cut from the Court's budget for 2000, so that the Court could hold at least three meetings in 2000 and translate and publish its *Annual Report* for that year.

On that occasion, the representatives of the states expressed their desire to see the Court's budget increased as of 2001, as the budget had been frozen since 1998. On the same occasion, I also met with the OAS Secretary-General, Mr. César Gaviria Trujillo, with his human rights adviser, Mr. Peter Quilter, with a number of Ambassadors and Permanent Representatives to the OAS, and with various representatives of cooperation agencies headquartered in Washington, D.C. and with which the Court has maintained relations.

VI. Adoption of the New Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights

At its XLIX regular session, held November 16-25, 2000, the Inter-American Court, by a resolution of November 24, 2000, adopted its new Rules of Procedure, with a view to tailoring the rules governing its procedures to the needs for more efficient the protection of the human rights enshrined in the American Convention. These Rules of Procedure will enter into force on June 1, 2001. To place in context the significant changes made in these new Rules of Procedure—one-quarter of the former version—it must be borne in mind that the 2000 OAS General Assembly, held in Windsor, Canada, adopted a resolution³ endorsing the recommendations of the Ad Hoc Working Group on Human Rights, made up of Representatives of the Chanceries of countries of the region (meeting in San José, Costa Rica, in February 2000).

The above-mentioned OAS General Assembly resolution, *inter alia*, called on the Inter-American Court, taking into consideration the *Reports* that it put forward, in representation of the Court, to the OAS organs on March 16, April 13, and June 6, 2000⁴, to consider the possibility of: (a) "allowing the direct participation of victims" in proceedings before the Court (once the case has been submitted to its jurisdiction), "taking into account the need to preserve balance in proceedings and to redefine the role of the IHRC in such proceedings;" and (b) avoiding "duplication of procedures" (once the case has been submitted to its jurisdiction), in particular "the production of proof, taking into account the differences in the nature" of the Court and the ICHR.

The changes made by the Court in its new Rules of Procedure have indeed had an impact on the streamlining of procedures as regards probatory matters and provisional measures; but

3 OEA/A.G., Resolution AG/RES. 1701 (XXX-0/00), 2000.

4 Reproduced in: OAS, *Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights, 2000*, doc. OEA/Ser.L/V/III.50-doc. 4, San José, Costa Rica, 2001, pp. 657-790.

the most significant change has consisted of allowing direct participation by presumed victims, their family members, or their representatives, in *all* phases of the proceedings before the Court (see below). In its Rules of Procedure of 2000, the Court introduced a series of provisions, especially related to preliminary exceptions, responses to petitions, and reparations, with a view to ensuring greater speed and flexibility in the process before it. The Court bore in mind the old adage "*Justice delayed is justice denied.*" In addition, to achieve more expeditious proceedings without prejudice to legal security, unnecessary costs would be avoided, to the benefit of all those involved in disputes before the Court.

In this spirit, as regards preliminary exceptions, whereas the previous Rules of Procedure of 1996 required that objections be entered within two months of notification of a petition, the Rules of Procedure of 2000 indicate that such exceptions may be introduced only in written responses to petitions (Article 36). Moreover, despite the fact that in the phase of preliminary exceptions the principle is applied of *reus in excipiendo fit actor*, the Rules of Procedure of 2000 establish that the Court can convene a special hearing on preliminary exceptions whenever it deems this indispensable; in other words, it may, depending on the circumstances, dispense with the hearing. And although the practice of the Court has to date been to issue first a ruling on preliminary exceptions, and if these are rejected, to hand down subsequently a ruling on substance, the Rules of Procedure of 2000 authorize the Court, in light of the principle of keeping proceedings to a minimum, to hand down decisions in a single ruling on both preliminary exceptions and the substance of a case (Article 36).

In turn, whereas under the Rules of Procedure of 1996 a response had to be made to a petition within four months of the notification of the petition, under the Rules of Procedure of 2000, a response must be submitted within two months of notification of a petition (Article 37.1). This, like other reductions of time limits, allows for greater speed in proceedings, to the benefit of the parties involved. Similarly, the Rules of Procedure of 2000 establish that, in responding to a petition, the state petitioned must declare if it agrees with the facts as set forth in the complaint and with the claims of the petitioner, or if it contests them; in this way, the Court can consider as agreed, any facts not expressly denied and any claims not expressly disputed (Article 37.2).

This, like other deadlines that have been shortened, makes it possible to process cases more quickly, benefiting the parties involved. Furthermore, the 2000 Rules of Procedure stipulate that the State's reply must indicate whether or not it accepts the facts denounced and the complainant's claims. Thus, the Court can consider all facts not specifically denied and all undisputed claims to be accepted (Article 37.2).

Regarding evidentiary matters, bearing in mind a recommendation from the OAS General Assembly (see above), the Court added a provision to its 2000 Rules of Procedure stating that the evidence presented to the Commission must be incorporated into the Court's case file, provided it is for adversary proceedings unless the Court deems it essential to duplicate the evidence. With this change, the Court aims to prevent the repetition of procedural acts, with a view

to streamlining the process and cutting costs. It should be borne in mind here that the alleged victims or their family members or representatives can independently contribute requests, arguments, and evidence throughout the proceedings (Article 43).

The new, fourth Rules of Procedure of the Court contain provisions allowing for the joinder of related cases by the Court, at any stage of the action, provided they share like parties, purposes, and regulatory foundations (Article 28). This too is aimed at streamlining proceedings before the Court. The 2000 Rules of Procedure also stipulate that the presentation of complaints and requests for advisory opinions must be transmitted not only to the president and other judges on the Court, but also to the OAS Permanent Council, through its Chair; complaints must also be transmitted to the State in question, the original complainant, and the alleged victim or his/her family members or duly-accredited representatives (Articles 35.2 and 62.1).

Up until now, it has been the practice of the Court to hold public hearings on provisional measures for human rights protection, when it deems necessary; however this was not provided for in the 1996 Rules of Procedure. The 2000 Rules of Procedure therefore incorporate a provision stipulating that the Court, or the president if the Court is not in session, can convene the parties to a public hearing on provisional measures, when deemed necessary (Article 25).

As for reparations, the 2000 Rules of Procedure state that complaints must include a claim for reparations and costs (Article 33.1); and the judgments issued by the Court must include, *inter alia*, a ruling on reparations and costs (Article 55.1.h). Here again, the Court is seeking to shorten proceedings, with a view to making them faster and less expensive, thus benefiting all the interested parties.

In keeping with the recommendation from the OAS General Assembly (see above), the Court added a series of measures to its 2000 Rules of Procedure aimed at allowing full participation (*locus standi in judicio*) by the alleged victims or their family members or duly-accredited representatives in all stages of the proceedings before the Court. Historically, this is the most important change to the fourth Rules of Procedure and a landmark in the evolution of the inter-American system for the protection of human rights.

The 1996 Rules of Procedure took the first step in this direction, by granting alleged victims, their family members, or their representatives the ability to present their own arguments and evidence to the Court, specifically in the reparations phase (Article 23). If the victims are present at the start of the process (when their rights are allegedly infringed) and at the *end* (as potential beneficiaries of the reparations), why then should they not be present *during* the proceedings, as the actual complainants? The 2000 Rules of Procedure sought to remedy this incongruity that persisted for over two decades (since the entry into force of the American Convention) in the inter-American human rights system.

In fact, with the Court's 2000 Rules of Procedure, the alleged victims and their family members or representatives can independently present requests, arguments, and evidence

throughout the proceedings (Article 23). Thus, when the Court acknowledges the complaint to the alleged victim or his/her family members or representatives, it gives them 30 days to present their requests, arguments, and evidence in writing (Article 35.4). During public hearings, they can also take the floor to present their arguments and evidence, because they are true participants in the process (Article 40.2).⁵ With this major advance, it is finally clear that the true parties in a contentious case before the Court are the individual complainants and the State being denounced, while the Inter-American Commission is only involved procedurally (Article 2.23).

By granting the alleged victims and their family members or representatives *locus standi in judicio* in all phases of proceedings before the Court, they now enjoy all the procedural powers and obligations that, up through the 1996 Rules, were held only by the Commission and the State in question (except in the reparations phase). This implies that three different positions may exist or coexist in proceedings before the Court: that of the alleged victim (or his/her family members or representatives) as a subject of international human rights law; that of the Commission, as an auxiliary body of the Court; and that of the State denounced.

This historic amendment to the Court's Rules of Procedure gives the proper weight to the different actors; improves the hearing of the case; ensures the principle of adversarial action, which is key in the pursuit of truth and justice under the American Convention; acknowledges that the direct opposition of the complainants and the States denounced is the essence of contentious international human rights cases; recognizes the alleged victims' right to freedom of expression, which is essential for the equity and transparency of the process; and, last but not least, guarantees equality of arms (*égalité des armes*) throughout the proceedings before the Court.⁶

VII. Visits by Latin American Presidents to the seat of the Inter-American Court of Human Rights

On April 4, 2000, Judge Alirio Abreu Burelli and I received the president of the Federative Republic of Brazil, His Excellency Fernando Henrique Cardoso, and a high-level delega-

5 Requests for interpretation will be transmitted by the secretary of the Court to the parties in the case, including naturally the alleged victims or their family members or representatives, so they can present the written arguments they deem relevant, within the deadline set by the president of the Court (Article 58.2).

6 See A.A. Cançado Trindade, "El Nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000): El Ser Humano como Sujeto del Derecho Internacional," *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos* (2001), special edition (at press). See also A.A. Cançado Trindade, "El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (1948-1995): Evolución, Estado Actual y Perspectivas," in *Derecho Internacional y Derechos Humanos/Droit international et droits de l'homme* (Commemorative book of the twenty-fourth session of the foreign program of the International Law Academy in The Hague, San José, Costa Rica, April/May 1995), The Hague/San José, IIDH/the International Law Academy in The Hague, 1996, pp. 47-95; and A.A. Cançado Trindade, "The Procedural Capacity of the Individual as Subject of International Human Rights Law: Recent Developments," in *Karel Vasak Amicorum Liber - Les droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle*, Brussels, Bruylant, 1999, pp. 521-544.

tion in San José, Costa Rica. The next day, as part of that visit, we received at the seat of the Court Secretary of State for Human Rights José Gregori, accompanied by the director of the Department of Human Rights and Special Issues of the Ministry of External Relations, Ambassador Marco Antônio Diniz Brandão, and Delegate Ney Lopes, representing the Latin American Parliament.

On May 29, 2000, as President of the Court, I received at the seat of the Court the president of the Republic of Colombia, His Excellency Andrés Pastrana Arango, accompanied by a high-level delegation that included the minister of foreign relations of Colombia, Mr. Guillermo Fernández de Soto, and the ambassador of Colombia to Costa Rica, Mr. Julio Aníbal Riaño Velandia. The delegation of President Andrés Pastrana was accompanied at the ceremony at the Court by the president of the Republic of Costa Rica, His Excellency Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, and other Costa Rican authorities.

On September 12, 2000, on behalf of the Court, I received at the seat of the Court the president of Costa Rica, His Excellency Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, the president of the Dominican Republic, m His Excellency Hipólito Mejía Domínguez, and the president-elect of the United Mexican States, His Excellency Vicente Fox Quesada, together with high-level officials from their distinguished delegations and from the host country, Costa Rica.

Recently, on December 5, 2000, I also received at the seat of the Court, the president of the Argentine Republic, His Excellency Fernando de la Rúa, accompanied by a high-level delegation that included the minister of foreign affairs of Argentina, Adalberto Rodríguez Giavarini, and the ambassador of Argentina to Costa Rica, Manuel María Pinto. President Fernando de la Rúa's delegation was accompanied at the ceremony at the Court by the president of the Republic of Costa Rica, His Excellency Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, and by the minister of foreign affairs and worship, Roberto Rojas López, among other officials.

These presidential visits, preceded by that of the president of Paraguay the previous year, represent a series of historic events for the Court, confirming the healthy trend toward respectful alignment and constructive dialogue between the states that created the inter-American system for the protection of human rights and the organs responsible for watching over their full observance of the provisions of the American Convention on Human Rights and other hemispheric human rights instruments.

During their respective visits, the aforementioned presidents underscored the contribution of the Inter-American Court, through its jurisprudence and doctrine, to the protection of human dignity and the restitution of the rights of individuals harmed in the cases that have come before the Court. They also stated that the Court's judgments and advisory opinions have made the countries in the region take steps to adapt their national laws to international standards for the protection of human rights. They also mentioned that the American Convention constitutes a major step forward, as a basic instrument for protecting fundamental human rights and faith-

fully reflecting the aspirations of the peoples in the region regarding the exercise of representative democracy and the prevalence of the rule of law.

The presidents further stressed the duty of the American States to strengthen the Court's role in the Hemisphere. They also stressed that there should be universal ratification of the American Convention and recognition of the contentious jurisdiction of the Court in order to strengthen the regional human rights system. Finally, they underscored the importance of the States Party to the American Convention integrally accepting the judgments of the Court, faithfully complying with them, and dealing with the problem of financing the regional system for the protection of human rights.

VIII. Thirtieth regular session of the OAS General Assembly (June 2000)

The OAS General Assembly held its thirtieth regular session from June 4 to 6, 2000 in Windsor, Canada. The Inter-American Court was represented by myself as its president, its vice president, Judge Máximo Pacheco Gómez, and the secretary of the Court, Manuel E. Ventura Robles. I presented the 1999 Annual Report of the Court to the General Assembly, which it adopted through resolution AG/RES. 1716 (XXX-O/00). The delegations of nine states took the floor in the General Committee of the Assembly to support the work of the Court. On Tuesday, June 6, 2000, the General Assembly reelected by acclamation the following judges to a six-year term: judge Antônio A. Cançado Trindade (Brazil), Oliver Jackman (Barbados) and Alirio Abreu Burelli (Venezuela), for the period from January 1, 2001 to December 31, 2006.

IX. Budget of the Court

At its twenty-seventh special session held in Washington D.C. on October 12, 2000, the OAS General Assembly adopted the 2001 budget of the Court in the amount of US\$1,284,700.00 (one million, two hundred and eighty-four thousand, and seven hundred dollars). Although there was a slight increase in the Court's budget, this amount is not sufficient to meet the growing needs of the Court. Therefore, the preliminary budget for 2002, which the Court has already presented for consideration by the competent bodies of the Organization, includes another increase that we hope the General Assembly will approve at its next session, to be held in San José, Costa Rica in early June 2001.

Although the OAS finances the Court's budget, the Government of Costa Rica gives US\$ 100,000.00 (one hundred thousand dollars) to the Court annually, as part of the commitment it made when it signed the 1983 agreement to be the seat of the Court. The Government of Costa Rica has already approved that amount in its 2001 budget.

A substantial increase has been requested in the preliminary budget of the Court for 2002 to cover the higher operating costs of the Court and its secretariat given the recent amendments to its Rules of Procedure; for example, the new Rules grant *locus standi in judicio* status to

alleged victims in all phases of the proceedings before the Court; it is no longer just the Commission and the State that appear before the Court, but rather the petitioners too, as the true complainants. The increase was also requested because the Court feels that, given the number of cases pending before the Court—30 contentious cases as mentioned earlier, although that number could rise by the end of 2001—the time has come to resolve the Court's shortage of resources once and for all, which includes the shortage of professionals in the secretariat and their salary level.

As mentioned earlier, the judges of the Court do not receive a salary for their work, not only during the regular session, but also for their time at the seat of the Court or when they are studying files and preparing drafts in their respective home countries. The system of payment by honorarium for the work conducted at the seat of the Court is wholly inadequate, and this is the only international tribunal that still operates this way. Priority must be given to financing, to establish a semi-permanent Court, then a permanent Court with the resources needed to function properly. May I also add that with the considerable increase in the number of cases pending before the Court, never has so much been asked of a generation of judges, despite the aforementioned lack of resources.

In the next few days, we will formally request an appointment with the OAS Committee on Administrative and Budgetary Affairs (CAAP) to explain the scope of the preliminary budget to the representatives. We are confident that the appointment will be granted, as is appropriate for the international court with the highest jurisdiction in our regional human rights system, since the work of the Inter-American Court speaks for itself, given the high professional and technical level of its judgments and other decisions.

We would appreciate it if the permanent representatives of the states present today could exercise their good offices with the delegates on the Committee on Administrative and Budgetary Affairs to see that this meeting is held in the first week of April, when I will return to Washington D.C. to present to the Committee on Juridical and Political Affairs, as agreed with that Committee's chair, the Court's opinion on the reform process and strengthening of our regional human rights system, in the framework of the CAJP dialogue on the system.

X. Auditing of the Court's financial statements

In keeping with the Court's healthy practice, its financial statements for fiscal year 2000 are being audited by an independent external auditing firm, *Venegas, Pizarro, Ugarte y Co.*, authorized public accountants and representatives in Costa Rica of HLB International. The audit encompasses both funds from the OAS and the contribution of the Costa Rican State for that period. A copy of the audit report will be transmitted in a timely manner to the OAS Department of Financial Services and the Inspector General of the Organization, as the Court has done over the years.

XI. Donations and international cooperation agreements

At a ceremony held on June 5, 2000 in Windsor, Canada, during the thirtieth regular session of the OAS General Assembly, the minister of external relations of Brazil, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, gave the Court a voluntary contribution of US\$50,000.00 to strengthen its institutional activities. On that occasion, I thanked the foreign minister for the contribution and stressed the importance of that donation at a time when the OAS was seeking additional resources to strengthen the inter-American system for the protection of human rights. Also present at that ceremony were Ambassador Carlos Alberto Leite Barbosa, formerly the permanent representative of Brazil to the OAS, as well as all the other members of Brazil's delegation to the OAS General Assembly. The vice president of the Court, Judge Máximo Pacheco Gómez, and its secretary, Manuel E. Ventura Robles, were also present.

On August 18, 2000, the inaugural ceremony was held for the Court's new building, which houses the joint library of the Court and the Inter-American Institute of Human Rights, the Inter-American Institute's documentation center, and the Court's publishing unit. The guests of the Court present that day, in addition to the judges and staff at the Court's secretariat, included the president of the Republic of Costa Rica, His Excellency Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; the second vice president of the Republic of Costa Rica, Mrs. Elizabeth Odio Benito; the minister of foreign affairs and worship, Mr. Roberto Rojas López; the minister of justice, Ms. Mónica Nagel; the executive director of the Inter-American Institute of Human Rights, Mr. Roberto Cuéllar; and members of the Institute's board of directors and the diplomatic corps accredited to the Government of Costa Rica.

At the ceremony, I thanked the government of the host country for its valuable support, which doubled the Inter-American Court's wealth and established the material foundation for the future establishment of an Inter-American Court that operates on a permanent basis. Finally, a plaque was given to express the Court's appreciation to the Republic of Costa Rica for having obtained, through international cooperation, the funds needed to purchase the building. The authorities present then toured the new library facilities—the most complete human rights library in the Hemisphere.

Regarding international cooperation agreements, in 2000 the Court signed several major agreements with renown institutions devoted to the promotion and protection of human rights: the International Institute of Human Rights (Strasbourg), the United Nations Development Programme (UNDP), the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Committee of the Red Cross (ICRC), and the Bancaja International Center for Peace and Development of the Caja Castellón Foundation (Spain).

The Court also followed up on the implementation of agreements signed in previous years with the Supreme Court of Justice of the Republic of Costa Rica, the Supreme Court of Justice of the Republic of Venezuela, the United Nations Development Programme (UNDP), Universidad Carlos III de Madrid, the Danish Centre for Human Rights, the legal research insti-

tute of the National Autonomous University of Mexico (UNAM), and the National School of the Judiciary of Brazil.

XII. Relations with other international human rights organizations

In 2000, the Court remained in constant contact and cooperation with different human rights organizations. Its activities included meetings with the president, judges, and staff of the European Court of Human Rights, held in July and October of that year in Strasbourg. The next meeting of judges from the two international human rights courts will be held in San José, Costa Rica in June 2001.

Joint education and training activities were conducted at the seat of the Court with the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Committee of the Red Cross (ICRC), and the United Nations Development Programme (UNDP). Furthermore, the seat of the Court also received a visit from a delegation from Sweden's Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

XIII. Conclusions

I would like to conclude my presentation of the 2000 Annual Report of the Court with a positive message for the representatives of the States present here today from myself and my colleagues at the Court. Let me express again, as I did at the outset, the confidence that the Inter-American Court has in the States Party to the American Convention as guarantors of the Convention. This year saw some notable events, including:

- *First*, the increase in the number of States that have accepted the contentious jurisdiction of the Court, with the recent recognition by the Dominican Republic, Haiti, Mexico, Brazil, and Barbados;

- *Second*, the positive contribution to the inter-American human rights system in recent years of several States that have fully or partially submitted to the respective complaints, by accepting the facts and their international responsibility. The following were encouraging: Suriname (*Aloeboetoe* case), Venezuela (*El Amparo* and *el Caracazo* cases), Argentina (*Maqueda* and *Garrido y Baigorria* cases), Ecuador (*Benavides Cevallos* case), Bolivia (*Trujillo Oroza* case), Guatemala (*Blake* case), and just a few days ago Peru (*Barrios Altos* case). In addition, there is a spirit of cooperation and adherence to procedure by the States called before the Court – an unequivocal sign of their confidence in the work of the Court;

- *Third*, the recent events in Peru and recent decisions taken by the current government promising to overcome past events that distanced the Peruvian State from the inter-American system for the protection of human rights, thereby strengthening the Court, at a time when the ideal of justice administration at the international level is gaining momentum;

- *Fourth*, the unfettered support that the host country, Costa Rica, has given the Court for over 20 years now, including financial support; in addition the Court has recently received donations from Mexico and Brazil to update its official publications, since the OAS budget has not provided funds for publishing and disseminating the Court's jurisprudence for many years now;

- *Fifth*, the recent historic visits to the seat of the Court of the presidents of the Argentine Republic, Brazil, Colombia, Costa Rica, Mexico, Paraguay, and the Dominican Republic, promoting constructive dialogue at the highest level between the States Party to the Convention and the Inter-American Court;

- *Sixth*, the Court is able to bring players together to strengthen the inter-American human rights system, as seen with the participation of several of the world's most distinguished jurists and human rights experts in the seminar and four meetings of experts organized by the Court and the release today in the OAS of the first volume of records from the aforementioned seminar on "The Inter-American System and the Protection of Human Rights at the Threshold of the 21st Century"; and

- *Seventh*, the adoption of the new Rules of Procedure of the Inter-American Court, which are aimed at achieving full participation by the alleged victims in all phases of contentious proceedings before the Inter-American Court, as petitioners and subjects of international law with full international legal capacity.

The Court reiterates its firm support for the work of the OAS Committee on Juridical and Political Affairs, chaired by Ambassador Margarita Escobar of El Salvador, in its initiative to follow up on the dialogue on the inter-American system for the protection of human rights. On Thursday, April 5, 2000, I will have the honor and privilege to return to address the representatives of the OAS member states to present the opinion and recommendations of the Court on strengthening the inter-American system for the protection of human rights.

We have promoted initiatives to strengthen the international protection of human rights in our corner of the world, aware that institutions that do not evolve with the times become stagnant. There is a pressing need for additional human and material resources that are essential for fully realizing what often seems to be but a utopia in our Hemisphere. Given the harsh realities of the modern world, we cannot live without utopias; we need to seek refuge in them if we truly wish to find a way to build a better world for future generations. I trust that together we can continue to move forward, promoting the irreversible evolution of the international protection of human rights in our region, so that tomorrow's reality can truly reflect what today is but a utopia. In short, we must meet the challenges of the day to address the new scope of the needs for protecting human beings at the dawn of the 21st century.

Informe del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la OEA (9 de marzo de 2001)

Madam Chair, Ambassadors, Permanent Representatives, on behalf of myself and judges Máximo Pacheco Gómez, Hernán Salgado Pesantes, Alirio Abreu Burelli, Sergio García Ramírez, and Carlos Vicente de Roux Rengifo, as well as the secretary of the Court, Manuel E. Ventura Robles, and the assistant secretary, Renzo Pomi, who are here with me today, and judge Oliver Jackman, who was not able to come to Washington D.C. I thank you for your attention today for my presentation of the 2000 Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights—the first presentation of the Court’s work in the 21st century. Thank you very much.

Washington, D.C.
March 9, 2001

CONSELHO PERMANENTE DA
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

COMISSÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
E POLÍTICOS

OEA/Ser.G
CP/CAJP-1770/01
16 março 2001
Original: espanhol

RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS, JUIZ ANTÔNIO A. CANÇADO TRINDADE, ANTE A
COMISSÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E POLÍTICOS DO
CONSELHO PERMANENTE DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

(Washington, D.C., 9 de março de 2001)

Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos da OEA, Embaixadora Margarida Escoar, Senhoras e Senhores Embaixadores e Representantes dos Estados Membros da OEA, há quase um ano, no dia 13 de abril de 2000, tive a honra de comparecer, acompanhado pelo Juiz Alirio Abreu Burelli e pelo Secretário, Manuel E. Ventura Robles, ante esta Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos (CAJP) do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA), então presidida pelo Embaixador Claude Heller, Representante Permanente do México junto à OEA. Naquela oportunidade realizei uma extensa apresentação do Relatório Anual de 1999, na qualidade de Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, depois da qual 16 Delegações fizeram uso da palavra para apoiar o Tribunal pelo fecundo trabalho realizado durante esse ano e para expressar seu desejo de que a Organização continue apoiando a Corte.

Hoje, 9 de março de 2001, em companhia do Vice-Presidente, de outros quatro Juízes da Corte, do Secretário e de outros membros da Secretaria do Tribunal, tenho a honra de voltar a dirigir-me aos Representantes dos Estados membros da OEA, desta vez com o objetivo de apresentar, ante esta mesma Comissão do Conselho Permanente, o Relatório Anual da Corte correspondente a 2000, que foi enviado à OEA no dia 17 de fevereiro passado e distribuído entre as delegações presentes.

A presença, nesta minha apresentação ante a OEA, de cinco de meus colegas Juízes da Corte, que gentilmente se dispuseram a acompanhar-me a Washington D.C., tem um valor simbólico: além de indicar o espírito colegiado que inspira nosso trabalho, revela a importância que nosso Tribunal atribui ao papel dos Estados Partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos como, em última instância, fiadores de nosso sistema regional de proteção. A noção

de *garantia coletiva*, exercida por todos os Estados Partes em conjunto, está subjacente tanto à Convenção Americana como a todos os tratados de direitos humanos.

Gostaria de passar ao relato das atividades da Corte durante 2000. A seguir, resumo os aspectos medulares de meu Relatório.

I. Apresentação de Novos Casos Contenciosos e Medidas Provisórias

Ao longo de 2000, foram submetidos à consideração da Corte Interamericana três novos casos contenciosos, a saber: casos *Constantine e outros e Benjamin e outros* contra Trinidad e Tobago, e caso *Barrios Altos* contra o Peru. Também foram apresentados dois pedidos de medidas provisórias de proteção: o caso de *Haitianos e Dominicanos de Origem Haitiana na República Dominicana* e o caso da *Comunidade de Paz de San José de Apartadó* a respeito da Colômbia. Além disso, foram adotadas três resoluções de medidas provisórias de proteção, nos casos do *Tribunal Constitucional, Ivcher Bronstein e Loayza Tamayo*, todos concernentes ao Peru.

II. Períodos de Sessões

O Tribunal realizou três períodos ordinários e um período extraordinário de sessões durante 2000. Nesses períodos de sessões¹ foram desenvolvidas as seguintes atividades: 11 audiências públicas sobre medidas provisórias, exceções preliminares, fundo, reparações e sobre um pedido de interpretação de uma sentença de mérito; foram proferidas sentenças sobre exceções preliminares nos casos da *Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni* contra a Nicarágua e *Las Palmeras* contra a Colômbia; sentenças de mérito nos casos *Durand y Ugarte* e *Cantoral Benavides*, ambos contra o Peru, *Trujillo Oroza* contra a Bolívia e *Bámaca Velásquez* contra a Guatemala; sentença de interpretação de sentença de mérito no caso *Cesti Hurtado* contra o Peru; resoluções sobre cumprimento de sentença nos casos *El Amparo* contra a Venezuela e *Garrido y Baigorria* contra a Argentina; resoluções sobre prática de prova no interior do Estado (exumação dos cadáveres de duas das supostas vítimas) no caso *Las Palmeras*; resoluções sobre requerimento ao Estado para localizar os familiares de várias vítimas que participaram na etapa de reparações nos casos *Villagrán Morales y otros* (caso dos "Niños de la Calle") contra a Guatemala e *Caracazo* contra a Venezuela; foram aprovadas 7 resoluções nas medidas provisórias adotadas em *Álvarez y otros* e *Clemente Teherán y otros*, ambas a respeito da Colômbia; *James y otros* a respeito de Trinidad e Tobago; *Colotenango* e *Blake*, ambos a respeito da Guatemala; foram adotadas as medidas provisórias já mencionadas nos casos de *Haitianos e Dominicanos de Origem Haitiana na República Dominicana*, nos casos do *Tribunal Constitucional* e *Ivcher Bronstein* a respeito do Peru, bem como no caso da Co-

1 XLVII (de 24 de janeiro a 4 de fevereiro), XLVIII (de 07 a 18 de agosto) e XLIX (de 16 a 25 de novembro) Períodos Ordinários de Sessões; e XXIV (de 12 a 15 de novembro) Período Extraordinário de Sessões.

unidad de Paz de San José de Apartadó a respeito da Colômbia. Além disso, foram levantadas as medidas provisórias ordenadas no caso *Cesti Hurtado* a respeito do Peru.

A Corte tem atualmente em trâmite 30 casos contenciosos em etapas processuais diferentes, além de 15 medidas provisórias de proteção. O Tribunal reafirma seu compromisso de atender esse volume de trabalho com a maior brevidade possível, sem prejuízo da segurança jurídica, desde que não haja cortes no orçamento e se aprovelem os aumentos solicitados para 2002 - claro está, levando em conta as limitações de seus recursos humanos e materiais e, principalmente, o fato de ainda não ser um tribunal permanente. Isso exigiu um compromisso cada vez maior dos Juízes para se reunir com mais frequência e assumir com dedicação novas obrigações que devem ser cumpridas em seus domicílios (por exemplo, redação de projetos de sentenças, comunicação mais frequente com a Secretaria da Corte e consultas com os outros juízes), tarefas que são realizadas sem compensação monetária alguma devido à falta de provisão de fundos.

III. Aceitação da Competência Contenciosa da Corte

Por ocasião do Trigésimo Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA em Windsor, Canadá, realizou-se no dia 5 de junho de 2000 uma cerimônia na qual Barbados reconheceu a competência contenciosa da Corte Interamericana. Neste ato, de tanta transcendência para a consolidação do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, estiveram presentes a Ministra das Relações Exteriores de Barbados, Senhora Billie A. Miller; o Secretário-Geral da OEA, Senhor César Gaviria Trujillo; o Presidente da Corte Interamericana; o Vice-Presidente, Juiz Máximo Pacheco Gómez; o Secretário, Senhor Manuel E. Ventura Robles, assim como vários Embaixadores Representantes Permanentes dos Estados do Caribe junto à OEA.

Cabe recordar que o Peru, mediante comunicação de 9 de julho de 1999, apresentou um documento na Secretaria-Geral da OEA em Washington, D.C., mediante o qual comunicou que "retira[va] a declaração de reconhecimento da cláusula facultativa de submissão à competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos", decisão esta que, em seu entender, "produzir[ia] efeito imediato e se aplicar[ia] a todos os casos em que o Peru não tivesse contestado a demanda apresentada ante a Corte". A Corte examinou o efeito dessa declaração nos casos *Ivcher Bronstein* e do *Tribunal Constitucional* (Sentenças sobre competência, de setembro de 1999) e declarou inadmissível a pretensão do Estado Peruano de retirar com efeitos imediatos a declaração de reconhecimento da competência obrigatória da Corte e decidiu continuar o conhecimento e a tramitação de ambos os casos.

Há poucas semanas (12 de janeiro de 2001), o Peru aprovou a Resolução Legislativa No 27401 com um artigo único cujo texto reza: "Derroga-se a Resolução Legislativa No 27152 e encarrega-se o Poder Executivo de realizar todas ações necessárias para deixar sem efeito os resultados que tenha gerado essa resolução legislativa, restabelecendo-se plenamente para o Estado Peruano a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos".

A Corte toma nota com grande satisfação do propósito recentemente expressado pelos órgãos do Estado Peruano, de normalizar as relações com o Tribunal, de conformidade com os princípios que inspiraram a ratificação da Convenção Americana e o cumprimento de boa fé deste instrumento de proteção internacional dos direitos humanos. Esta expressão da vontade estatal de cumprir as obrigações internacionais livremente contraídas, que representa o reencontro do Estado Peruano com sua melhor tradição e pensamento jurídicos, foi recentemente reiterada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça do Peru, Doutor Diego García-Sayán, na visita realizada à sede da Corte no dia 9 de fevereiro de 2001. A Corte manifesta sua confiança em que o Estado Peruano dará pleno cumprimento, num prazo razoável, a todas as sentenças proferidas pela Corte pendentes de execução.

Sobre o tema da aceitação da competência da Corte, me permito formular um apelo - tal como fiz em meu *Relatório* do ano passado - aos Estados que ainda não o fizeram, para que ratifiquem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e reconheçam a competência obrigatória da Corte Interamericana em matéria contenciosa, a fim de que nosso sistema de proteção dos direitos humanos se enriqueça com a universalidade de composição no âmbito regional de sua operação.

Tenho a firme convicção - tal como expressei em diversas ocasiões - de que o real compromisso de um país com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos se mede por sua iniciativa e determinação de tornar-se Parte nos tratados de direitos humanos, assumindo assim as obrigações convencionais de proteção neles consagradas. No presente domínio de proteção, os mesmos critérios, princípios e normas devem valer para todos os Estados, juridicamente iguais, bem como operar em benefício de todos os seres humanos, independentemente de sua nacionalidade ou quaisquer outras circunstâncias.

Os Estados que se excluíram do regime jurídico da Convenção Americana sobre Direitos Humanos têm uma dívida histórica com o sistema interamericano de proteção, que deve ser resgatada. Enquanto todos os Estados membros da OEA não ratificarem a Convenção Americana, não aceitarem integralmente a competência contenciosa da Corte Interamericana e não incorporarem as normas substantivas da Convenção Americana em seu direito interno, muito pouco se avançará no fortalecimento real do sistema interamericano de proteção. É pouco o que podem fazer os órgãos internacionais de proteção, se as normas convencionais de salvaguarda dos direitos humanos não alcançam as bases das sociedades nacionais. Por isso, me permito hoje reformular meu apelo, respeitoso mas franco, que espero repercuta devidamente na consciência jurídica de todos os Estados membros da OEA.

IV. Reunião dos Dirigentes da Corte e da Comissão Interamericanas de Direitos Humanos

Em 18 de novembro de 2000 realizou-se uma reunião na sede da Corte Interamericana em San José, Costa Rica, entre o Presidente e Vice-Presidente da Corte, Juízes Antônio A. Cançado Trindade e Máximo Pacheco Gómez, e o Presidente e Primeiro Vice-Presidente da

Comissão, Hélio Bicudo e Claudio Grossman. A reunião manifestou as estreitas e harmônicas relações de coordenação que inspiram ambos os órgãos de proteção dos direitos humanos do sistema interamericano e estabeleceu a temática da próxima reunião conjunta entre a Corte e a Comissão, a ser realizada no dia de 8 de março de 2001, na cidade de Washington D.C., de acordo com o mandato da Assembléia Geral da OEA.

Ao final da reunião do dia 18 de novembro de 2000 em San José, Costa Rica, os Presidentes da Corte e da Comissão, Juiz Antônio A. Cançado Trindade e Senhor Hélio Bicudo, enviaram uma carta conjunta ao Secretário-Geral da OEA, Senhor César Gaviria Trujillo, informando-o sobre os temas acordados para consideração por ambos os órgãos, entre os quais se incluem os seguintes: a) fortalecimento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos; b) agilização do processo de reforma de seus Regulamentos, mandato que já foi cumprido tanto pela Corte como pela Comissão; c) coordenação contínua entre ambos os órgãos do sistema para o fiel desempenho de suas funções; d) cumprimento das sentenças e outras decisões da Corte, e as recomendações da Comissão; e) busca conjunta de melhor financiamento para a operação de ambos os órgãos de proteção. A referida carta também menciona a necessidade de obter os recursos humanos e econômicos adicionais de que vão a necessitar ambos os órgãos para um melhor cumprimento de suas obrigações convencionais nos próximos anos.

Conforme decidido na reunião de 18 de novembro passado, a Corte e a Comissão plenária se reuniram na cidade de Washington D.C., no dia 8 de março, para examinar os temas anteriormente mencionados. Os dois órgãos mantiveram um frutífero debate aprofundado, sobretudo acerca da aplicação futura dos novos Regulamentos adotados por ambas as entidades, bem como sobre o fortalecimento da supervisão do cumprimento pelos Estados das sentenças da Corte e das recomendações da Comissão.

No final da reunião de ontem, os Presidentes da Corte e da Comissão, Juiz Antônio A. Cançado Trindade e Senhor Claudio Grossman, enviaram uma carta conjunta ao Secretário-Geral da OEA, Senhor César Gaviria Trujillo, informando-o a respeito, solicitando recursos adicionais da OEA para que ambos os órgãos possam desempenhar fielmente seu trabalho (até que esses recursos alcancem pelo menos 10% do orçamento regular da Organização) e ressaltando a importância de que os Estados da região incorporem as normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos em seu direito interno e de que seus Poderes Judiciários utilizem mais amplamente a jurisprudência internacional em matéria de proteção dos direitos humanos.

V. Fortalecimento do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos

Com o objetivo de dar continuidade às atividades de alto nível para o fortalecimento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, iniciadas em 1999, com a realização de duas reuniões de especialistas durante os meses de setembro e novembro daquele ano, além do Seminário "*O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos no Umbral do Século XXI*", que teve lugar em San José, Costa Rica, em novembro de 1999, a Corte realizou em 2000

duas novas reuniões de especialistas, com o fim de identificar critérios sobre as medidas que devem ser adotadas para fortalecer o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos.

Essas reuniões foram realizadas na sede da Corte, sob minha coordenação, durante o mês de fevereiro de 2000. Nessas reuniões participaram os Juízes da Corte, Membros da Comissão e altas personalidades no campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Tenho a satisfação de comunicar aos Embaixadores e Representantes dos Estados que, no final de minha exposição, estarei circulando a todos os primeiros exemplares, que acabam de ser impressos, do primeiro tomo de atas (em 750 páginas) do recente Seminário sobre *O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos no Umbral do Século XXI*, que comprova o poder de convocação da Corte e representa uma de suas contribuições ao fortalecimento do sistema interamericano de proteção.

É para mim um motivo de particular satisfação que o lançamento oficial desta publicação histórica se efetue na sede de nossa Organização regional, e no seio de sua Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos.

Sobre o tema do fortalecimento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, o Grupo de Trabalho *ad hoc* sobre os Direitos Humanos, criado pelos Ministros das Relações Exteriores reunidos em San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1999, se reuniu nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2000, no Ministério das Relações Exteriores e Culto de Costa Rica, com o objetivo de recomendar as medidas concretas para o fortalecimento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Nessa reunião, tive a honra de representar a Corte, em companhia de seu Secretário, Manuel E. Ventura Robles; na ocasião, informei ao referido Grupo *ad hoc* sobre as conclusões alcançadas nas duas atividades organizadas pela Corte que acabo de mencionar. Devo recordar que as recomendações do Grupo *ad hoc* foram aprovadas pelo Trigésimo Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA (realizada em junho de 2000, em Windsor, Canadá); uma recomendação do Grupo *ad hoc* acolhida pela Assembléia Geral foi precisamente a das reformas dos regulamentos da Corte e da Comissão, o que hoje, como expressei, já é uma realidade, que contribuirá para impulsionar o aperfeiçoamento de nosso sistema de proteção.

De 13 a 17 de março de 2000, convidado pelo então Presidente, Embaixador Claude Heller, Representante Permanente do México junto à OEA, visitei esta mesma Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos do Conselho Permanente da OEA, para relatar, no dia 16 de março, as recentes contribuições da Corte sobre a reforma e o fortalecimento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos.² Aproveitei a visita também para reunir-me com

2 Cf. OEA, *Relatório do Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Juiz Antônio A. Cançado Trindade, à Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos no âmbito do Diálogo sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos* (16 de março de 2000), documento OEA/Ser.G/CP/CAJP-1627/00, de 17.03.2000, reproduzido em: OEA, *Relatório Anual da Corte Interamericana de Direitos Humanos - 2000*, Anexo XLIX, páginas 657-687.

os diversos Embaixadores de países da América Central, América do Sul, Caribe e América do Norte credenciados ante a OEA, bem como com vários altos funcionários da OEA.

Posteriormente, em 13 de abril de 2000, voltei a fazer uso da palavra ante esta Comissão da OEA, com o propósito de apresentar o *Relatório Anual* de atividades da Corte referente a 1999, o qual foi acolhido com grande satisfação. Neste sentido, os membros da Comissão se manifestaram favoráveis a que se reintegrassem pelo menos US\$100.000,00 dos US\$150.500,00 cortados do orçamento da Corte para 2000, para que o Tribunal pudesse realizar, ao menos, três sessões durante 2000, bem como traduzir e publicar seu *Relatório Anual* correspondente a esse ano.

Nessa oportunidade, os Representantes dos Estados expressaram seu desejo de que se aumentasse o orçamento da Corte a partir de 2001, já que este se encontrava congelado desde 1998. Na mesma ocasião também me reuni com o Secretário-Geral da OEA, Senhor César Gaviria Trujillo, com seu assessor em matéria de direitos humanos, Senhor Peter Quilter, com alguns Embaixadores Representantes Permanentes junto à OEA, bem como com vários representantes de agências de cooperação com sede na cidade de Washington, D.C., com as quais a Corte manteve relações.

VI. Adoção do Novo Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos

No XLIX Período Ordinário de Sessões, realizado de 16 a 25 de novembro de 2000, a Corte Interamericana adotou, mediante resolução de 24 de novembro do mesmo ano, seu novo Regulamento, visando a adequar as normas que regem seus procedimentos aos requisitos de uma garantia mais eficaz dos direitos humanos consagrados na Convenção Americana. Este Regulamento entrará em vigor em 1 de junho de 2001. Para contextualizar as significativas alterações introduzidas neste novo Regulamento – o quarto de sua história – cabe recordar que a Assembléia Geral da OEA de 2000, realizada em Windsor, Canadá, adotou uma resolução³ acolhendo as recomendações do Grupo de Trabalho *ad hoc* sobre Direitos Humanos de Representantes dos Chanceleres dos países da região (que se reuniu em San José, Costa Rica, em fevereiro de 2000).

Essa resolução da Assembléia Geral da OEA, *inter alia*, recomendou que a Corte Interamericana, levando em consideração os *Relatórios* que apresentei, em representação da Corte, aos órgãos da OEA nos dias 16 de março, 13 de abril e 6 de junho de 2000,⁴ considerasse a possibilidade de: a) "permitir a participação direta da vítima" no procedimento ante a Corte (uma vez submetido o caso à sua competência), "levando em conta a necessidade tanto de preservar o equilíbrio processual, como de redefinir o papel da CIDH nesses procedimentos"; e b) evitar a "duplicação de procedimentos" (uma vez submetido o caso à sua competência), em

3 OEA/AG, resolução AG/RES. 1701 (XXX-0/00), de 2000.

4 Reproduzidos em: OEA, *Relatório Anual da Corte Interamericana de Direitos Humanos – 2000*, documento OEA/Ser.L/V/III.50/doc.4, San José, Costa Rica, 2001, páginas 657-790.

particular "a produção da prova, levando em conta as diferenças de natureza" entre a Corte e a CIDH.

As modificações introduzidas pela Corte em seu novo Regulamento incidiram, efetivamente, na racionalização dos atos processuais, em matéria probatória e medidas provisórias; mas a modificação de maior transcendência consistiu na participação direta das supostas vítimas, seus familiares ou seus representantes, em *todas* as etapas do procedimento perante a Corte (cf. *infra*). Em seu Regulamento de 2000, a Corte introduziu uma série de disposições, sobretudo em relação com as exceções preliminares, a contestação da demanda e as reparações, para assegurar uma maior agilidade no processo. A Corte teve presente o velho ditado "*justice delayed is justice denied*"; além disso, ao obter um processo mais expedito, sem prejuízo da segurança jurídica, se evitariam custos desnecessários, em benefício de todos os atores envolvidos nos casos contenciosos ante a Corte.

Neste espírito, no que se refere às exceções preliminares, enquanto o anterior Regulamento de 1996 dispunha que deviam ser apresentadas dentro dos dois meses seguintes à notificação da demanda, o Regulamento de 2000 determina que essas exceções só poderão ser interpostas na contestação da demanda (artigo 36). Além disso, apesar de que na etapa de exceções preliminares se aplica o princípio *reus in excipiendo fit actor*, o Regulamento de 2000 estabelece que a Corte poderá convocar uma audiência especial sobre exceções preliminares quando considerar indispensável, isto é, poderá, dependendo das circunstâncias, prescindir da audiência. Embora a prática da Corte até agora tenha sido a de emitir primeiramente uma sentença sobre exceções preliminares e, se desconsideradas, posteriormente uma sentença sobre o mérito, o Regulamento de 2000 dispõe, à luz do princípio da economia processual, que a Corte poderá resolver numa só sentença tanto as exceções preliminares como o mérito do caso (artigo 36).

Por sua vez, a contestação da demanda, que segundo o anterior Regulamento de 1996 devia ser feita dentro de quatro meses seguintes à notificação da demanda, segundo o Regulamento de 2000 deve ser apresentada dentro dos dois meses seguintes à notificação da demanda (artigo 37.1). Esta, como outras reduções de prazos, permite tramitar o processo com maior agilidade, em benefício das partes envolvidas. O Regulamento de 2000 estabelece que, na contestação da demanda, o Estado demandado deverá declarar se aceita os fatos denunciados e as pretensões do demandante, ou se os contradiz; desse modo, a Corte poderá considerar como aceitos os fatos não expressamente negados e as pretensões não expressamente controvertidas (artigo 37.2).

Em matéria probatória, tendo presente uma recomendação da Assembléia Geral da OEA (cf. *supra*), a Corte introduziu em seu Regulamento de 2000 uma disposição segundo a qual as provas apresentadas à CIDH devem ser incorporadas aos autos do processo perante a Corte, desde que tenham sido recebidas em procedimentos contraditórios, salvo que a Corte considere indispensável repeti-las. Com esta inovação a Corte pretende evitar a repetição de atos processuais, agilizar o processo e economizar seus custos. Deve-se ter sempre em mente que as

supostas vítimas, seus familiares ou representantes, podem apresentar, durante todo o processo, suas petições, argumentos e provas de forma autônoma (artigo 43).

Segundo o novo e quarto Regulamento da Corte, esta poderá dispor a acumulação de casos conexos entre si, em qualquer estado da causa, desde que exista identidade de partes, objeto e base normativa entre os casos a serem acumulados (artigo 28). Esta providência também se enquadra no propósito de racionalização do procedimento ante a Corte. O Regulamento de 2000 dispõe, também, que as demandas e os pedidos de opiniões consultivas devem ser transmitidos, além do Presidente e demais juízes da Corte, ao Conselho Permanente da OEA, através de seu Presidente; quanto às demandas, deverão igualmente ser remetidas ao Estado demandado, à CIDH, ao denunciante original e à suposta vítima, seus familiares ou representantes devidamente credenciados (artigos 35.2 e 62.1).

Quanto às medidas provisórias de proteção, embora a prática da Corte tenha sido, até agora, a de celebrar - quando estime necessário - audiências públicas sobre essas medidas, esta possibilidade não estava presente no Regulamento de 1996. Por sua vez, o novo Regulamento de 2000 incorpora uma disposição que estabelece que a Corte, ou seu Presidente se esta não estiver reunida, poderá convocar as partes, se considerar necessário, a uma audiência pública sobre as referidas medidas provisórias (artigo 25).

Em matéria de reparações, o Regulamento de 2000 determina que, entre as pretensões expressadas na própria demanda, deve-se incluir as referentes às reparações e custas (artigo 33.1). Por sua vez, as sentenças emitidas pela Corte devem conter, *inter alia*, o pronunciamento sobre reparações e custas (artigo 55.1, h). Desse modo, uma vez mais se busca reduzir a duração do processo ante o Tribunal, à luz do princípio da agilidade e economia processuais, e em benefício de todos os interessados.

Tal como recomendado pela Assembléia Geral da OEA (cf. *supra*), a Corte introduziu em seu novo Regulamento de 2000 uma série de medidas destinadas a outorgar às supostas vítimas, seus familiares ou seus representantes devidamente credenciados, a participação direta (*locus standi in judicio*) em todas as etapas ante o Tribunal. Em perspectiva histórica, esta é a modificação mais transcendental do quarto Regulamento da Corte, além de um verdadeiro marco na evolução do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos.

O Regulamento de 1996 havia dado o primeiro passo nessa direção, ao outorgar às supostas vítimas, seus familiares ou seus representantes a faculdade de apresentar seus próprios argumentos e provas em forma autônoma, especificamente na etapa de reparações (artigo 23). Se as vítimas se encontram no *inicio* do processo (ao ser supostamente lesadas em seus direitos), bem como no *final* do mesmo (como eventuais beneficiários das reparações), por que razão negar sua presença *durante* o processo, como verdadeira parte demandante? O Regulamento de 2000 veio remediar esta incongruência que perdurou por mais de duas décadas (desde a entrada em vigor da Convenção Americana) no sistema interamericano de proteção.

Com o Regulamento de 2000 da Corte Interamericana, as supostas vítimas, seus familiares ou representantes poderão apresentar petições, argumentos e provas de forma autônoma durante *todo* o processo ante o Tribunal (artigo 23). Assim, uma vez que a Corte notifica a demanda à suposta vítima, seus familiares ou representantes, lhes outorga um prazo de 30 dias para a apresentação, em forma autônoma, dos documentos contendo seus pedidos, argumentos e provas (artigo 35.4). Durante as audiências públicas, poderão fazer uso da palavra para a apresentação de seus argumentos e provas, devido a sua condição de verdadeira parte no processo (artigo 40.2).⁵ Com este relevante avanço, fica por fim esclarecido que as verdadeiras partes num caso contencioso ante a Corte são os indivíduos demandantes e o Estado demandado, e, só processualmente, a Comissão Interamericana (artigo 2.23).

Com a concessão do *locus standi in judicio* às supostas vítimas, seus familiares ou seus representantes, em todas as etapas do processo ante a Corte, passam a desfrutar de todas as faculdades e obrigações, em matéria processual, que, até o Regulamento de 1996, eram privativos unicamente da Comissão e do Estado demandado (exceto na etapa de reparações). Isto implica que, no procedimento ante a Corte, poderão existir, ou coexistir, três posturas distintas: a da vítima (seus familiares ou representantes), como sujeito do Direito Internacional dos Direitos Humanos; a da Comissão, como órgão auxiliar da Corte; e a do Estado demandado.

Esta histórica reforma introduzida no Regulamento da Corte situa os distintos atores em perspectiva correta; contribui a uma melhor instrução do processo; assegura o princípio do contraditório, essencial na busca da verdade e a prevalência da justiça sob a Convenção Americana; reconhece ser da essência do contencioso internacional dos direitos humanos a contraposição direta entre os indivíduos demandantes e os Estados demandados; reconhece o direito de livre expressão das próprias supostas vítimas, o qual é um imperativo de equidade e transparência do processo; e, *last but not least*, garante a igualdade processual das partes (*equality of arms/égalité des armes*) em todo o procedimento ante a Corte.⁶

5 Quanto à demanda de interpretação, será comunicada pelo Secretario da Corte às partes no caso - incluídas naturalmente as supostas vítimas, seus familiares ou seus representantes - para que apresentem as alegações escritas que considerem pertinentes, dentro de um prazo fixado pelo Presidente da Corte (artigo 58(2)).

6 Cf. Antônio A. Cançado Trindade, *El Nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (2000); *El Ser Humano como Sujeto del Derecho Internacional*, Revista do Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2001), número especial (no prelo). E cf., anteriormente, Antônio Cançado Trindade, *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (1948-1995): Evolución, Estado Actual y Perspectivas*, in *Derecho Internacional y Derechos Humanos/Droit international et droits de l'homme* (Libro Commemorativo de la XXIV Sesión del Programa Exterior de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, San José de Costa Rica, abril/maio de 1995), La Haya/San José, IIDH/Académie de Droit International de La Haye, 1996, páginas 47-95; Antonio A. Cançado Trindade, "The Procedural Capacity of the Individual as Subject of International Human Rights Law: Recent Developments", in *Karel Vasak Amicorum Liber - Les droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle*, Bruxelles, Bruylant, 1999, páginas 521-544.

VII. Visitas de Presidentes Latino-Americanos à Sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Em 4 de abril de 2000 recebi, em companhia do Juiz Alirio Abreu Burelli, em San José, Costa Rica, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, acompanhado por uma comitiva de alto nível. Por motivo desta visita, no dia seguinte recebemos na sede do Tribunal o Secretário de Estado de Direitos Humanos, Senhor José Gregori, acompanhado do Diretor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Especiais do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Marco Antônio Diniz Brandão, e do Deputado Ney Lopes, em representação do Parlamento Latino-Americano.

Em 29 de maio de 2000, na qualidade de Presidente da Corte, recebi o Excelentíssimo Senhor Presidente da República da Colômbia, Andrés Pastrana Arango, na sede da Corte, acompanhado por uma comitiva de alto nível que incluiu o Ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Senhor Guillermo Fernández de Soto e o Embaixador da Colômbia em San José, Costa Rica, Senhor Julio Aníbal Riaño Velandia. A comitiva do Presidente Andrés Pastrana foi acompanhada na cerimônia na Corte pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República da Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, entre outras autoridades costarriquenhas.

Em 12 de setembro de 2000 recebi, em nome da Corte, na sede do Tribunal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Dominicana, Hipólito Mejía Domínguez, e o Excelentíssimo Senhor Presidente Eleito dos Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, acompanhados por altas autoridades de suas ilustres comitivas, bem como do país sede da Corte.

Há pouco tempo, em 5 de dezembro de 2000, também recebi na sede da Corte o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Argentina, Fernando de la Rúa, acompanhado por uma comitiva de alto nível que incluiu o Ministro das Relações Exteriores da Argentina, Senhor Adalberto Rodríguez Giavarini e o Embaixador da Argentina em San José, Costa Rica, Senhor Manuel María Pinto. A comitiva do Presidente Fernando de la Rúa foi acompanhada na cerimônia na Corte pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República da Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, e pelo Ministro das Relações Exteriores e Culto, Roberto Rojas López, entre outras autoridades.

Todas as visitas presidenciais anteriormente citadas, precedidas pela visita do Excelentíssimo Senhor Presidente do Paraguai no ano anterior, representam uma série de eventos históricos para o Tribunal, confirmando uma tendência muito salutar de aproximação respeitosa e diálogo construtivo entre os Estados que criaram o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e os órgãos encarregados de velar pelo fiel cumprimento das disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e demais instrumentos atinentes à proteção dos direitos da pessoa humana no hemisfério.

Os Presidentes da República dos países mencionados ressaltaram, durante suas respectivas visitas, a contribuição da Corte Interamericana, através de sua jurisprudência e doutrina, à defesa da dignidade humana e ao restabelecimento dos direitos dos indivíduos que foram vulnerados nos casos por ela decididos. Também destacaram que as sentenças e opiniões consultivas da Corte fizeram com que os países da região tomassem iniciativas no sentido de adequar suas legislações nacionais às normas internacionais de proteção. Também mencionaram o importante avanço que representa a Convenção Americana, ao constituir um instrumento básico na proteção dos direitos fundamentais do ser humano, e ao refletir fielmente as aspirações dos povos da região em matéria de exercício da democracia representativa e de prevalência do Estado de Direito.

Os Presidentes da República, durante suas visitas, também ressaltaram o dever dos Estados americanos de fortalecer o papel da Corte Interamericana no hemisfério. Destacaram que a ratificação da Convenção Americana e o reconhecimento da competência contenciosa da Corte deve ser universal para consolidar o sistema regional de proteção. Por fim, sublinharam a importância de que os Estados Partes na Convenção Americana aceitem integralmente as sentenças da Corte, dando fiel cumprimento às mesmas, e enfrentem o problema do financiamento do sistema regional de proteção dos direitos humanos.

VIII. Trigésimo Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA (Junho de 2000)

A Assembléia Geral da OEA realizou, de 4 a 6 de junho de 2000, seu Trigésimo Período Ordinário de Sessões em Windsor, Canadá. A Corte Interamericana esteve representada por mim, na qualidade de Presidente, por seu Vice-Presidente, Juiz Máximo Pacheco Gómez, e pelo Secretario da Corte, Manuel E. Ventura Robles. Ali apresentei à Assembléia Geral o *Relatório Anual* de atividades do Tribunal, correspondente a 1999, o qual foi por ela aprovado mediante a Resolução AG/RES. 1716 (XXX-O/00). As Delegações de 9 Estados fizeram uso da palavra, na Comissão Geral da Assembléia, em apoio às atividades da Corte. No dia 6 de junho de 2000, a Assembléia Geral reelegeu, em suas funções, por aclamação, para um novo mandato de 6 anos, os juízes Antônio A. Cançado Trindade (Brasil), Oliver Jackman (Barbados) e Alirio Abreu Burelli (Venezuela), para o período que se estende de 1 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2006.

IX. Orçamento da Corte

A Assembléia Geral da OEA aprovou, em seu Vigésimo Sétimo Período Extraordinário de Sessões realizado na cidade de Washington D.C., em 12 de outubro de 2000, o orçamento da Corte para 2001 no valor de US\$1.284.700,00 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos dólares dos Estados Unidos da América). Embora esta cifra represente um incremento sensível no orçamento da Corte, devo assinalar que este montante não é suficiente para as necessidades crescentes do Tribunal, motivo pelo qual o projeto de orçamento para 2002, já apresentado pela Corte à consideração dos órgãos competentes da Organização, inclui um novo

aumento que esperamos seja aprovado pela Assembléia Geral em seu próximo período de sessões, que se realizará em San José, Costa Rica, em princípios do mês de junho do presente ano.

Embora o orçamento da Corte Interamericana seja financiado pela OEA, também conta o Tribunal com uma doação do governo da Costa Rica à Corte num montante anual de US\$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), como parte de seu compromisso ao firmar o Convênio de Sede em 1983. Este montante já havia sido aprovado pelo Governo da Costa Rica no orçamento de 2001.

Com relação ao projeto de orçamento da Corte para o próximo ano, solicitou-se um incremento substancial com o propósito de cobrir os custos mais altos de operação do Tribunal e sua Secretaria, devido a que, com a recente reforma do Regulamento da Corte, que outorga *locus standi in judicio* às supostas vítimas em todas as etapas do procedimento ante o Tribunal, já não comparecerão apenas a Comissão e o Estado demandado, mas também os indivíduos peticionários como verdadeira parte demandante. O incremento foi solicitado também porque o Tribunal considera que, devido ao número de casos pendentes ante o Tribunal – 30 casos contenciosos conforme mencionado, mas que poderão aumentar até o final de 2001 – chegou o momento de resolver, de maneira definitiva, as limitações dos recursos da Corte, que incluem a carência de profissionais em sua Secretaria e o nível salarial de remuneração dos mesmos.

Conforme assinalado anteriormente, os Juízes da Corte não recebem um salário pelo trabalho que realizam, não somente nos períodos de sessões, quando se encontram na sede do Tribunal, mas tampouco quando estudam os expedientes e preparam os projetos nos respectivos domicílios em seus países de origem. O sistema de honorários pelo trabalho realizado na sede do Tribunal é manifestamente inadequado, sendo atualmente o único tribunal internacional que ainda o tem. Deve-se dar prioridade ao financiamento, para o estabelecimento de uma Corte semipermanente, seguida de uma Corte permanente, com os recursos necessários para seu adequado funcionamento. Permitam-me agregar que, com o considerável aumento no número de casos pendentes ante a Corte, nunca uma geração de juízes foi tão exigida como a atual, apesar da referida carência de recursos.

Nos próximos dias solicitaremos formalmente ante a Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários da OEA uma audiência para explicar os alcances deste projeto de orçamento aos representantes. Temos certeza de que nossa petição será atendida, como cabe a um tribunal internacional da mais alta hierarquia em nosso sistema regional de proteção, já que o trabalho da Corte Interamericana se defende por si mesmo, devido ao alto nível profissional e técnico de suas sentenças e outras decisões.

Muito agradeceríamos aos Srs. Representantes dos Estados aqui presentes seus bons ofícios junto aos Delegados credenciados junto à Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários, no sentido de assegurar esta audiência durante a primeira semana do próximo mês de abril, em que regressarei a Washington, D.C., para apresentar à Comissão de Assuntos Jurídicos

cos e Políticos, conforme acordado com a Presidente desta Comissão, o parecer da Corte sobre o processo de reforma e fortalecimento de nosso sistema regional de direitos humanos, no âmbito do Diálogo da CAJP sobre esse sistema.

X. Auditoria das Demonstrações Financeiras da Corte

Como já é costume da Corte, atualmente se está praticando uma auditoria de suas demonstrações financeiras, correspondentes ao período fiscal do ano 2000, por parte da firma de Auditores Externos Independentes Venegas, Pizarro, Ugarte e Co., Contadores Públicos Autorizados, representantes na Costa Rica da firma HLB International. A auditoria compreende tanto os fundos provenientes da OEA como a contribuição do Estado da Costa Rica para o mesmo período. Cópia do relatório dessa auditoria será enviada oportunamente ao Departamento de Serviços Financeiros da OEA e ao Inspetor Geral da Organização, como tem sido a prática da Corte ao longo dos anos.

XI. Doações e Acordos de Cooperação Internacional

Numa cerimônia efetuada no dia 5 de junho de 2000 em Windsor, Canadá, durante a celebração do Trigésimo Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Luiz Felipe Palmeira Lampreia, entregou à Corte uma contribuição voluntária de US\$ 50.000,00 para fortalecer as atividades institucionais do Tribunal. Nessa oportunidade, agradei a doação ao Chanceler do Brasil e destaquei a importância da mesma, num momento em que a própria OEA está em busca de recursos adicionais para fortalecer o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Nessa cerimônia estiveram também presentes o Embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa, ex-Representante Permanente do Brasil junto à OEA, bem como todos os membros da Delegação do Brasil na Assembléia Geral da OEA. Pela Corte, estiveram presentes o Vice-Presidente, Juiz Máximo Pacheco Gómez e o Secretário, Senhor Manuel E. Ventura Robles.

Em 18 de agosto de 2000, realizou-se a cerimônia de inauguração do novo edifício da Corte, ocupado pela Biblioteca Conjunta da Corte e o Instituto Interamericano de Direitos Humanos, o Centro de Documentação do Instituto Interamericano e a Unidade Editorial do Tribunal. Nela estiveram presentes, como convidados do Tribunal, além dos Juízes e pessoal da Secretaria da Corte, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República da Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; a Segunda Vice-Presidente da República da Costa Rica, Senhora Elizabeth Odio Benito; o Ministro das Relações Exteriores e Culto, Engenheiro Roberto Rojas López; a Ministra da Justiça, Mónica Nagel; o Diretor Executivo do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, Senhor Roberto Cuéllar, e membros do Conselho Diretivo desse instituto e do Corpo Diplomático credenciado junto ao Governo da Costa Rica.

Na ocasião, agradei ao Governo do país sede este valioso apoio, por meio do qual se conseguiu duplicar o patrimônio da Corte Interamericana, estabelecendo as bases materiais para que no futuro a Corte Interamericana possa operar em base permanente. Finalmente, desvelou-

se uma placa de agradecimento da Corte à República da Costa Rica por ter conseguido, da cooperação internacional, os fundos necessários para adquirir o edifício; em seguida, as autoridades presentes percorreram as instalações da nova Biblioteca, a mais completa do continente americano em matéria de direitos humanos.

No que se refere a acordos de cooperação internacional, a Corte firmou, durante 2000, diversos acordos e convênios de importância, com reconhecidas instituições dedicadas à proteção e promoção dos direitos humanos, a saber: o Instituto Internacional de Direitos Humanos (de Estrasburgo), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) e o Centro Internacional Bancaja para a Paz e o Desenvolvimento da Fundação Caja Castellón, na Espanha.

Deu-se seguimento à implementação dos convênios subscritos em anos anteriores com a Corte Suprema de Justiça da República da Costa Rica, a Corte Suprema de Justiça da República da Venezuela, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Universidade Carlos III de Madri, o Centro Dinamarquês para os Direitos Humanos, o Instituto de Pesquisas Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e a Escola Nacional da Magistratura do Brasil.

XII. Relações com outros Organismos Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos

No transcurso de 2000, a Corte manteve constante contato e colaboração com diversos organismos dedicados à proteção dos direitos humanos. Entre estas atividades, cabe ressaltar as reuniões mantidas com o Presidente, Juízes e pessoal da Corte Européia de Direitos Humanos nos meses de julho e outubro passados, em Estrasburgo. A próxima reunião entre Juízes dos dois Tribunais internacionais de direitos humanos será realizada em San José, Costa Rica, em junho de 2001.

Da mesma maneira, foram realizadas atividades conjuntas de ensino e capacitação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), todas na sede da Corte; na sede do Tribunal recebeu-se a visita de uma delegação do Instituto Raoul Wallenberg de Direitos Humanos e Direito Humanitário, da Suécia.

XIII. Conclusões

Queria concluir a apresentação deste *Relatório Anual* da Corte, referente a 2000, com uma mensagem positiva aos Representantes dos Estados aqui presentes, tanto da minha parte como de meus colegas do Tribunal. Permito-me expressar, tal como assinali no início de minha exposição, a confiança que a Corte Interamericana tem nos Estados Partes da Convenção Americana como fiadores da mesma. Cabe destacar, neste sentido, como fatos notáveis:

● *Primeiro*, o aumento no número de Estados que aceitaram a competência contenciosa da Corte, com os recentes reconhecimentos da República Dominicana, Haiti, México, Brasil e Barbados;

● *Segundo*, a contribuição positiva ao sistema interamericano de proteção que, nos últimos anos, vários Estados deram à Corte, que corresponderam total ou parcialmente às respectivas demandas, aceitando os fatos e sua responsabilidade internacional; cabe recordar, neste sentido, os exemplos alentadores do Suriname (caso *Aloeboetoe*), Venezuela (casos *Amparo* e do *Caracazo*), Argentina (casos *Maqueda* e *Garrido e Baigorria*), Equador (caso *Benavides Cevallos*), Bolívia (caso *Trujillo Oroza*), Guatemala (caso *Blake*), recentemente, há alguns dias, o Peru (caso *Barrios Altos*); a isto se acrescenta o espírito de cooperação e lealdade processuais demonstrado por outros Estados demandados ante a Corte, revelando de forma inequívoca a confiança depositada no seu trabalho;

● *Terceiro*, os recentes acontecimentos ocorridos no Peru, e as recentes decisões tomadas por seu atual Governo, que prometem superar os eventos que distanciavam o Estado peruano do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, com o conseqüente fortalecimento da Corte, num momento em que ganha cada vez maior espaço o ideal da realização da justiça no âmbito internacional;

● *Quarto*, o apoio irrestrito que durante mais de 20 anos o país sede, Costa Rica, deu à Corte, inclusive financeiramente, ao qual se somam as recentes doações do México e Brasil ao Tribunal, destinadas à atualização de suas publicações oficiais, já que o orçamento da OEA não contemplava fundos para a edição e divulgação da jurisprudência da Corte há muitos anos;

● *Quinto*, as recentes visitas históricas à sede da Corte dos Excelentísimos Senhores Presidentes da República da Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, México, Paraguai e República Dominicana, fomentando o diálogo construtivo, no mais alto nível, entre os Estados Partes na Convenção Interamericana e a Corte Interamericana;

● *Sexto*, a comprovação do poder de convocação da Corte, para fortalecer o sistema interamericano de direitos humanos, com a participação de vários dos mais ilustres juristas do mundo, especialistas na temática dos direitos humanos, que acorreram ao Seminário e às quatro Reuniões de Especialistas organizadas pela Corte, e a divulgação hoje na OEA do primeiro tomo de atas do referido Seminário sobre "*O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos no Umbral do Século XXI*";

● *Sétimo*, a aprovação do novo Regulamento da Corte Interamericana, que se orienta decididamente no sentido de uma plena participação das supostas vítimas - como parte demandante - em todas as etapas do processo contencioso ante a Corte Interamericana, como sujeitos do Direito Internacional dos Direitos Humanos dotados de plena capacidade jurídica internacional.

A Corte reitera seu firme apoio ao trabalho desta Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos da OEA, presidida pela Senhora Embaixadora Margarida Escoar, de El Salvador, quanto à iniciativa do seguimento ao Diálogo sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. No dia 5 de abril do presente ano, terei a honra e privilégio de voltar a dirigir-me aos Representantes dos Estados Membros da OEA, com o fim de expor o parecer e as recomendações da Corte sobre o fortalecimento do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos.

Promovemos iniciativas em prol do fortalecimento da salvaguarda internacional dos direitos da pessoa humana em nossa parte do mundo, conscientes de que as instituições que não acompanham a evolução dos tempos se estagnam. Urge contar com os recursos humanos e materiais adicionais, indispensáveis para a realização plena do que às vezes parece ser, em nosso continente, ainda uma utopia. Mas ante as brutalidades do mundo contemporâneo, não podemos viver sem utopias, necessitamos ao menos refugiar-nos nelas, se desejamos realmente buscar os meios de construir, para as gerações futuras, um mundo melhor do que encontramos. Confio em que, todos juntos, possamos seguir adiante impulsionando a evolução irreversível da proteção internacional dos direitos humanos em nossa região, para que a realidade de amanhã possa refletir fielmente o que continua parecendo hoje uma utopia. Temos, em suma, que atuar à altura dos desafios de nossos tempos, para atender à nova dimensão das necessidades de proteção do ser humano neste início do século XXI.

Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Embaixadores e Representantes, em meu nome e em nome dos Juízes Máximo Pacheco Gómez, Hernán Salgado Pesantes, Alirio Abreu Burelli, Sergio García Ramírez e Carlos Vicente de Roux Rengifo, bem como em nome do Secretário, Manuel E. Ventura Robles, e do Secretário adjunto, Renzo Pomi, que me acompanham neste ato, bem como do Juiz Oliver Jackman, que não pôde vir a Washington D.C., agradeço a atenção com que me distinguiram nesta ocasião ao escutar a apresentação do *Relatório Anual* da Corte Interamericana de Direitos Humanos correspondente a 2000 – a primeira apresentação das atividades da Corte no século XXI. Muito obrigado a todos.

Washington, D.C., 9 de março de 2001

CONSEIL PERMANENT DE
L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES
ET POLITIQUES

OEA/Ser.G
CP/CAJP-1770/01
16 mars 2001
Original: espagnol

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA
COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME,
ANTÔNIO A. CANÇADO TRINDADE,
DEVANT LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES
ET POLITIQUES DU CONSEIL PERMANENT DE
L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

(Washington, D.C., 9 mars 2001)

Madame la Présidente de la Commission des questions juridiques et politiques de l'OEA
et Ambassadrice, Margarita Escobar,
Mesdames les Ambassadrices,
Messieurs les Ambassadeurs et
Représentants des États membres de l'OEA,

Il y a près d'un an, le jeudi 13 avril 2000, j'ai eu l'honneur de me présenter, accompagné par le Juge Alirio Abreu Burelli et par le Secrétaire, M. Manuel E. Ventura Robles, devant cette Commission des questions juridiques et politiques (CAJP) du Conseil permanent de l'Organisation des États Américains (OEA), qui était alors présidée par l'Ambassadeur Claude Heller, Représentant permanent du Mexique près l'OEA. À cette occasion, j'ai fait une présentation détaillée du Rapport annuel de 1999, en ma qualité de Président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, à la suite de laquelle 16 délégations ont pris la parole pour rendre hommage au Tribunal pour le travail fécond qu'il a accompli pendant l'année en question et exprimer le désir que l'Organisation continue à appuyer la Cour.

Aujourd'hui, le 9 mars 2001, en compagnie du Vice-président et de quatre autres juges de la Cour, et du Secrétaire et d'autres membres du Secrétariat du Tribunal, j'ai l'honneur de m'adresser de nouveau aux Représentants des États membres de l'OEA, cette fois en vue de présenter, devant la même Commission du Conseil permanent, le Rapport annuel de la Cour correspondant à 2000, lequel a été envoyé à l'OEA le 17 février et distribué aux délégations présentes.

La présence, à l'occasion de ma présentation devant l'OEA, de cinq de mes collègues juges de la Cour, qui ont gentiment décidé de m'accompagner à Washington D.C., a une valeur symbolique : outre qu'elle témoigne de l'esprit d'équipe qui inspire nos travaux communs, elle révèle l'importance que notre Tribunal attribue au rôle des États parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme en tant que garants de dernier ressort de notre système régional de protection. La notion de *garantie collective*, exercée par l'ensemble des États parties, est sous-jacente à la Convention américaine comme à tous les traités sur les droits de l'homme.

Permettez-moi maintenant de présenter les activités de la Cour en 2000. Les principaux aspects de mon Rapport sont résumés ci-dessous.

I. Soumission de nouvelles affaires contentieuses et mesures provisoires

Sur l'ensemble de l'année 2000, la Cour interaméricaine a été saisie de trois nouvelles affaires contentieuses, à savoir: les affaires *Constantine et consorts* et *Benjamin et consorts* contre la Trinité-et-Tobago, et l'affaire *Barrios Altos* contre le Pérou. Elle a aussi été saisie de deux demandes de mesures provisoires de protection: dans l'affaire des *Haitiens et des Dominicains d'origine haïtienne en République dominicaine*, et dans celle de la *Comunidad de Paz de San José de Apartadó* concernant la Colombie. De plus, trois décisions relatives à des mesures provisoires de protection ont été adoptées d'office, dans les affaires du *Tribunal constitutionnel Ivcher Bronstein* et *Loayza Tamayo*, qui concernent toutes le Pérou.

II. Sessions

Le Tribunal a tenu trois sessions ordinaires et une session extraordinaire en 2000. Ces sessions¹ ont comporté les activités suivantes : 11 audiences publiques se rapportant à des mesures provisoires, des exceptions préliminaires, des jugements au fond, des réparations et une demande d'interprétation d'un jugement au fond; des décisions ont été émises sur des exceptions préliminaires dans les affaires de la *Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni* contre le Nicaragua et *Las Palmeras* contre la Colombie; des jugements au fond dans les affaires *Durand y Ugarte* et *Cantoral Benavides*, toutes les deux contre le Pérou, *Trujillo Oroza* contre la Bolivie et *Bámaca Velásquez* contre le Guatemala; une décision d'interprétation de jugement au fond dans l'affaire *Cesti Hurtado* contre le Pérou; des résolutions sur l'exécution de la décision dans les affaires *El Amparo* contre le Venezuela et *Garrido y Baigorria* contre l'Argentine; des résolutions sur l'administration de la preuve à l'intérieur de l'État (exhumation du corps de deux des victimes supposées) dans l'affaire *Las Palmeras*; des résolutions sur la requête présentée à l'État en vue de localiser les membres des familles de plusieurs victimes pour qu'ils participent à l'étape des réparations dans les affaires *Villagrán Morales et consorts* (affaire des "Enfants de la rue") contre le Guatemala et du *Caracazo* contre le Venezuela; 7 résolutions ont été rendues

1 XLVIIe (24 janvier-4 février), XLVIIIe (7-18 août), et XLIXe (16-25 novembre) Sessions ordinaires; et XXIVe (12-15 novembre) Session extraordinaire.

au sujet des mesures provisoires adoptées dans les affaires *Álvarez et consorts* et *Clemente Teherán et consorts*, concernant toutes deux la Colombie; *James et consorts* (Trinité-et-Tobago); *Colotenango et Blake* (Guatemala); comme il est mentionné ci-dessus, des mesures provisoires ont été adoptées dans les affaires des *Hàïtiens et des Dominicains d'origine hàïtienne en République dominicaine*, du *Tribunal constitutionnel* et *Ivcher Bronstein* (Pérou), ainsi que dans celle de la *Comunidad de Paz de San José de Apartadó* (Colombie). Par ailleurs, les mesures provisoires imposées dans l'affaire *Cesti Hurtado* (Pérou) ont été levées.

Trente affaires contentieuses qui se trouvent à différentes étapes de la procédure sont actuellement en cours d'instruction devant la Cour et 15 mesures provisoires de protection sont appliquées. Le Tribunal réaffirme son engagement de faire face à cette charge de travail le plus rapidement possible, sans préjudice de la sécurité juridique, pourvu que son budget ne soit pas amputé et que les augmentations demandées pour 2002 lui soient accordées, - compte tenu évidemment des limitations de ses ressources humaines et matérielles et, surtout, du fait qu'il n'est pas encore un tribunal permanent. Devant cette situation, les juges ont dû faire preuve d'une détermination croissante pour accroître le rythme des sessions et s'acquitter entièrement des nouvelles obligations qu'ils doivent remplir à leur domicile (comme, par exemple, la rédaction des projets de décision, le resserrement des relations avec le Secrétariat de la Cour et la tenue de consultations avec les autres juges), autant d'activités qu'ils exercent sans compensation monétaire en raison du manque de provisions à cet effet.

III. Acceptation de la compétence contentieuse de la Cour

À l'occasion de la XXXe Session de l'Assemblée générale de l'OEA qui a eu lieu à Windsor, (Canada), une cérémonie a été célébrée le lundi 5 juin 2000, au cours de laquelle la Barbade a reconnu la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine. Au cours de cette cérémonie si importante pour la consolidation du Système interaméricain de protection des droits de la personne, ont été présents la Ministre des affaires étrangères de la Barbade, Mme Billie A. Miller; le Secrétaire général de l'OEA, M. César Gaviria Trujillo; le Président de la Cour interaméricaine, le Juge Antônio A. Cançado Trindade; le Vice-président, le Juge Máximo Pacheco Gómez; le Secrétaire, M. Manuel E. Ventura Robles, ainsi que plusieurs Ambassadeurs, Représentants permanents des États des Caraïbes près l'OEA.

Il convient de rappeler que le Pérou, par sa communication en date du 9 juillet 1999, a présenté un document au Secrétariat général de l'OEA à Washington, DC., selon lequel "il fait (faisait) le retrait de la déclaration de reconnaissance de la clause facultative d'acceptation de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l'homme", retrait qui, à son avis, "prendrait effet immédiatement et s'appliquerait à toutes les affaires pour lesquelles le Pérou n'aurait pas répondu à la demande introduite devant la Cour". La Cour a examiné les répercussions qu'aurait cette déclaration dans l'affaire *Ivcher Bronstein* et dans celle du *Tribunal constitutionnel* (Décisions sur la compétence, de septembre 1999), et a déclaré irrecevable la prétention de l'État péruvien de retirer avec effet immédiat la déclaration d'acceptation

de la juridiction obligatoire de la Cour et a décidé de continuer de connaître des deux affaires et d'en poursuivre l'instruction.

Il y a quelques semaines (le 12 janvier 2001), le Pérou a approuvé la Résolution législative No 27401 comportant un seul article et rédigée en ces termes : - "(Le Pérou) déroge à la Résolution législative No 27152 et charge le pouvoir exécutif de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette résolution législative soit sans effet, et rétablit pleinement pour l'État péruvien la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l'homme".

La Cour prend note avec grande satisfaction de l'objectif, récemment annoncé par les organes de l'État péruvien, de normalisation des relations avec le Tribunal, conformément aux principes qui ont inspiré la ratification de la Convention américaine et l'application de bonne foi de cet instrument de protection international des droits de l'homme. Cette expression de la volonté de l'État péruvien d'honorer ses obligations internationales librement contractées, qui représente les retrouvailles de l'État avec ses meilleures tradition et pensée juridiques, vient d'être réaffirmée par le Ministre de la justice du Pérou, Diego García-Sayán, lors de la visite qu'il a effectuée au siège de la Cour le 9 février 2001. La Cour se déclare convaincue que l'État péruvien exécutera intégralement, dans un délai raisonnable, toutes les décisions émises par la Cour, qui sont en instance d'exécution

Toujours sur la question de l'acceptation de la compétence de la Cour, je me permets de lancer un appel - comme je l'ai fait dans mon Rapport de l'année dernière- aux États qui n'ont pas encore ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme pour qu'ils le fassent et reconnaissent la juridiction obligatoire de la Cour interaméricaine en matière contentieuse, afin que notre système de protection des droits de l'homme soit enrichi par l'universalité de sa composition dans la sphère régionale où elle fonctionne.

J'ai la ferme conviction, - comme je l'ai dit à différentes occasions, - que le véritable engagement d'un pays à l'égard des droits de l'homme reconnus au niveau international se mesure par son initiative et sa détermination à devenir partie aux traités sur les droits de l'homme, assumant ainsi les obligations conventionnelles de protection qui y sont reconnues. Dans le domaine de protection en question, les mêmes critères, principes et normes doivent être valables pour tous les États, juridiquement égaux, et doivent bénéficier à tous les êtres humains, indépendamment de leur nationalité ou de toute autre circonstance.

Les États qui se sont eux-mêmes exclus du régime juridique de la Convention américaine relative aux droits de l'homme ont une dette historique envers le système interaméricain de protection, qu'ils se doivent de racheter. Tant que tous les États membres de l'OEA ne ratifieront pas la Convention américaine, n'accepteront pas entièrement la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine et n'intégreront pas les normes fondamentales de la Convention américaine dans leur droit interne, on ne progressera guère sur la voie d'un vrai renforcement du système interaméricain de protection. Les organes internationaux de protection ne peuvent pas faire grand chose, si les normes conventionnelles de sauvegarde des droits de

l'homme ne touchent pas la base des sociétés des différents pays. C'est la raison pour laquelle je me permets aujourd'hui de reformuler mon appel, avec respect mais franchise, qui, je l'espère, trouvera un écho favorable dans la conscience juridique de tous les États membres de l'OEA.

IV. Réunion des bureaux de la Cour et de la Commission interaméricaine des droits de l'homme

Le 18 novembre 2000, une réunion a eu lieu au siège de la Cour interaméricaine à San José de Costa Rica, entre le Président et le Vice-président de la Cour et les Juges Antônio A. Cançado Trindade et Máximo Pacheco Gómez, d'une part, et le Président et le Premier vice-président de la Commission et les membres de la Commission MM. Hélio Bicudo et Claudio Grossman, d'autre part. La réunion a mis en relief les relations étroites et harmonieuses de coordination qui inspirent les deux organes de protection des droits de l'homme du Système interaméricain, et a permis d'établir le thème de la prochaine réunion conjointe de la Cour et de la Commission interaméricaines qui aura lieu le 8 mars 2001 à Washington DC., conformément au mandat de l'Assemblée générale de l'OEA.

À l'issue de la réunion du 18 novembre 2000 qui s'est tenue à San José de Costa Rica, le Président de la Cour, le Juge A.A. Cançado Trindade, et le Président de la Commission, M. Hélio Bicudo, ont adressé une lettre commune au Secrétaire général de l'OEA, M. César Gaviria Trujillo, pour l'informer des thèmes convenus qui seront soumis à l'examen des deux organes, dont notamment: a) le renforcement du système interaméricain de protection des droits de la personne; b) l'accélération du processus de réforme de leurs Règlements respectifs, mandat que la Cour et la Commission ont déjà exécuté; c) la coordination continue entre les deux organes du système pour l'exercice assidu de leurs fonctions; d) l'exécution des arrêts et autres décisions de la Cour et des recommandations de la Commission; e) la recherche conjointe du meilleur financement pour le fonctionnement des deux organes de protection. La lettre susindiquée fait aussi mention de la nécessité d'obtenir les ressources humaines et économiques additionnelles dont les deux organes auront besoin pour mieux s'acquitter de leurs obligations conventionnelles dans les prochaines années.

Conformément à ce qui a été décidé à la réunion du 18 novembre dernier, la Cour et la Commission se sont réunies en séance plénière à Washington DC., hier, c'est-à-dire le 8 mars, pour examiner les thèmes susmentionnés. Les deux organes ont mené un débat fructueux et en profondeur, surtout sur l'application future des nouveaux Règlements que tous les deux ont adoptés, ainsi que sur le renforcement de la surveillance de l'exécution par les États des arrêts de la Cour et des recommandations de la Commission.

À l'issue de la réunion d'hier, les Présidents de la Cour et de la Commission, le Juge A.A. Cançado Trindade et M. Claudio Grossman, ont adressé une lettre conjointe au Secrétaire général de l'OEA, M. César Gaviria Trujillo, pour le tenir informé, lui demander un montant supplémentaire de ressources de l'OEA pour que les deux organes puissent mener assidûment

leurs activités (jusqu'à ce que le montant de ces ressources atteigne au moins 10% du budget ordinaire de l'Organisation) et souligner l'importance pour les États de la région d'incorporer les normes du droit international des droits de l'homme dans leur droit interne et pour leur pouvoir judiciaire d'utiliser plus largement la jurisprudence internationale en matière de protection des droits de l'homme.

V. Renforcement du Système interaméricain de protection des droits de la personne

En vue d'assurer la continuité des activités de haut niveau destinées à renforcer le Système interaméricain de protection des droits de la personne, amorcées en 1999, avec la tenue de deux réunions d'experts en septembre et en novembre, en plus du Séminaire sur le thème "*Le Système interaméricain de protection des droits de la personne à l'aube du XXI^e siècle*", qui a eu lieu à San José de Costa Rica en novembre 1999, la Cour a tenu en 2000 deux autres réunions d'experts afin de déterminer les critères relatifs aux moyens qu'il faut se donner pour renforcer le système interaméricain de protection des droits de la personne.

Ces réunions dont j'ai assuré la coordination ont eu lieu au siège de la Cour en février 2000. Y ont participé les juges de la Cour, les membres de la Commission et de hautes personnalités du domaine du droit international des droits de l'homme. J'ai le plaisir de faire savoir à Mesdames les Ambassadrices et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des États qu'à la fin de mon exposé je ferai circuler parmi vous les premiers exemplaires, qui viennent d'être publiés, du premier tome du compte rendu (en 750 pages) du récent Séminaire sur le thème "*Le Système interaméricain de protection des droits de la personne à l'aube du XXI^e siècle*", qui témoigne du pouvoir de convocation de la Cour et représente l'une de ses contributions au renforcement du système interaméricain de protection.

Je me réjouis particulièrement du fait que le lancement officiel de cette publication historique a lieu au siège de notre Organisation régionale et au sein de sa Commission des questions juridiques et politiques.

Sur le thème du renforcement du Système interaméricain de protection des droits de la personne, le Groupe de travail *ad hoc* sur les droits de la personne, créé par les Ministres des affaires étrangères réunis à San José de Costa Rica le 22 novembre 1999, a tenu une réunion les 10 et 11 février 2000 au Ministère des affaires étrangères et du culte de Costa Rica afin de recommander les mesures concrètes de nature à renforcer le Système interaméricain de protection des droits de la personne. Lors de cette réunion, j'ai eu l'honneur de représenter la Cour, accompagné de son Secrétaire, M. Manuel E. Ventura Robles; à cette occasion, j'ai tenu informé le Groupe *ad hoc* en question des conclusions auxquelles ont abouti les deux activités organisées par la Cour que je viens de mentionner. Il convient de rappeler que les recommandations du Groupe *ad hoc* ont été adoptées par la XXX^e Assemblée générale de l'OEA (tenue en juin 2000 à Windsor, (Canada); une recommandation du Groupe *ad hoc* approuvée par l'Assemblée générale a été précisément celle des réformes des Règlements de la Cour et de la Commission, ce qui est déjà, comme je l'ai mentionné, une réalité, qui contribuera à don-

ner une impulsion au perfectionnement de notre Système interaméricain de protection des droits de la personne.

Du 13 au 17 mars 2000, sur l'invitation de l'Ambassadeur Claude Heller, Représentant permanent du Mexique près l'OEA, qui était alors le Président de la Commission des questions juridiques et politiques (CAJP) du Conseil permanent de l'OEA, j'ai rendu visite à la CAJP, pour faire rapport le 16 mars sur les récentes contributions de la Cour à la réforme et au renforcement du Système interaméricain de protection des droits de la personne². J'ai profité de cette visite pour m'entretenir avec les divers ambassadeurs des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et d'Amérique du Nord accrédités près l'OEA, ainsi qu'avec plusieurs hauts fonctionnaires de l'OEA.

Ensuite, le 13 avril 2000, j'ai pris de nouveau la parole devant la Commission des questions juridiques et politiques de l'OEA, pour présenter le Rapport annuel des activités de la Cour en 1999, lequel a été accueilli avec grande satisfaction. À ce sujet, les membres de la Commission se sont félicités de la proposition visant à réinscrire au budget 2000 un montant équivalant à au moins EU\$100 000,00 sur les EU\$150 500,00 qui en avaient été retirés, pour que le Tribunal puisse tenir au moins trois sessions en 2000, et traduire et publier son Rapport annuel couvrant l'année 2000.

À cette occasion, les Représentants des États ont exprimé le désir d'accroître le budget de la Cour à partir de 2001, lequel est gelé depuis 1998. J'ai aussi eu un entretien avec le Secrétaire général de l'OEA, M. César Gaviria Trujillo, avec son conseiller en matière de droits de l'homme, M. Peter Quilter, avec quelques ambassadeurs représentants permanents près l'OEA, ainsi qu'avec plusieurs représentants d'agences de coopération ayant leur siège à Washington, DC., avec lesquels la Cour a maintenu des relations.

VI. Adoption du nouveau Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l'homme

Lors de sa XLIXe Session ordinaire, qui a eu lieu du 16 au 25 novembre 2000, la Cour interaméricaine a adopté, par sa Résolution du 24 novembre de la même année, son nouveau Règlement, en vue d'adapter les normes régissant ses procédures aux besoins d'une garantie plus efficace des droits de l'homme reconnus dans la Convention américaine. Ce Règlement entrera en vigueur le 1er juin 2001. Pour replacer dans leur contexte les importantes modifications introduites dans ce nouveau Règlement, - le quatrième de son histoire, - il convient de rappeler que l'Assemblée générale de l'OEA de 2000, qui a eu lieu à Windsor, (Canada), a adopté

2 Voir OEA, Rapport du Président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le juge Antônio A. Cançado Trindade, à la Commission des questions juridiques et politiques du Conseil permanent de l'Organisation des États Américains dans le cadre du dialogue sur le Système interaméricain de protection des droits de la personne (16 mars 2000), document OEA/Ser.G/CP/CAJP-1627/00 du 17/03/2000, reproduit dans: OEA, Rapport annuel de la Cour interaméricaine des droits de l'homme - 2000, Annexe XLIX, pp. 657-687.

une résolution³ contenant les recommandations du Groupe de travail *ad hoc* sur les droits de la personne composé des Représentants des Ministres des affaires étrangères des pays de la région (qui s'est réuni à San José de Costa Rica, en février 2000).

Par cette résolution de l'Assemblée générale de l'OEA, la Cour interaméricaine a été chargée, *inter alia*, lors de l'examen des Rapports que j'ai présentés, au nom de la Cour, aux organes de l'OEA les 16 mars, 13 avril et 6 juin 2000⁴, d'envisager la possibilité de: a) "permettre la participation directe de la victime" à la procédure suivie dans l'affaire portée devant la Cour (une fois l'affaire soumise à sa compétence), "en tenant compte de la nécessité tant de préserver l'impartialité de la procédure que de redéfinir le rôle de la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans ces procédures "; et b) d'éviter le "double emploi en matière de procédures" (une fois l'affaire soumise à sa compétence), en particulier "la production des éléments de preuve, compte tenu de la nature différente" de la Cour et de la CIDH.

Les modifications introduites par la Cour dans son nouveau Règlement ont eu une incidence sur la rationalisation des actes de procédure, en matière de preuves et de mesures provisoires; mais la modification la plus importante a consisté à permettre aux victimes présumées, aux membres de leur famille ou à leurs représentants de participer directement à toutes les étapes de l'affaire portée devant la Cour (cf. *infra*). Dans son Règlement de 2000, la Cour a introduit une série de dispositions, surtout en ce qui concerne les exceptions préliminaires, la réponse à la demande et les réparations, en vue d'accélérer et d'assouplir le procès. La Cour s'est fondée sur le vieil adage "*justice delayed is justice denied*"; en outre, en accélérant le procès, sans préjudice de la sécurité juridique, les frais inutiles seraient évités au profit de tous les acteurs participant aux affaires contentieuses en cours d'instruction devant la Cour.

Dans cet esprit, en ce qui concerne les exceptions préliminaires, le Règlement de 1996 disposait qu'elles devaient être introduites dans les deux mois suivant la notification de la demande, mais celui de 2000 établit qu'elles ne peuvent être soulevées que dans le texte de la réponse à la demande (article 36). De plus, bien que dans l'étape des exceptions préliminaires on applique le principe *reus in excipiendo fit actor*, le Règlement de 2000 établit que la Cour pourra convoquer une audience spéciale sur les exceptions préliminaires lorsqu'elle le jugera indispensable, c'est-à-dire qu'elle pourra, en fonction des circonstances, ne pas tenir d'audience. Et, bien que dans la pratique la Cour ait jusqu'à présent commencé par rendre une décision sur les exceptions préliminaires, et, en cas de refus, de rendre ensuite un jugement au fond, le Règlement de 2000 dispose, à la lumière du principe de l'économie judiciaire, que la Cour pourra statuer au moyen d'un seul arrêt sur les exceptions préliminaires et le fond de l'affaire (article 36).

3 OEA/A.G., résolution AG/RES.1701 (XXX-0/00) de 2000.

4 Reproduits dans: OEA, *Rapport annuel de la Cour interaméricaine des droits de l'homme - 2000*, doc. OEA/Ser.L/V/III.50-doc.4, San José de Costa Rica, 2001, pp. 657-790.

Quant à la réponse à la demande, elle devait être présentée, d'après l'ancien Règlement de 1996, dans les quatre mois suivant la notification de la demande, mais, selon le Règlement de 2000, elle doit l'être dans les deux mois suivant la notification de la demande [article 37(1)]. Cette réduction, à l'instar des autres réductions de délais, permet d'accélérer la procédure au profit des parties en question. Le Règlement 2000 établit aussi que, dans la réponse à la demande, l'État requis devra déclarer s'il accepte les faits dénoncés et les prétentions du requérant, ou s'il les contredit; de cette façon, la Cour pourra considérer comme étant acceptés les faits qui n'ont pas été expressément niés et les prétentions qui n'ont pas été expressément controversées [article 37(2)].

En matière de preuves, compte tenu d'une recommandation de l'Assemblée générale de l'OEA (cf. *supra*), la Cour a introduit dans son Règlement 2000 une disposition selon laquelle les preuves produites devant la CIDH doivent être incorporées au dossier de l'affaire portée devant la Cour, pourvu qu'elles aient été reçues dans les procédures contradictoires, sauf si la Cour juge indispensable de les reproduire. Avec cette innovation, la Cour cherche à éviter la répétition d'actes de procédure pour accélérer le procès et économiser sur son coût. À ce sujet, il ne faut jamais perdre de vue que les victimes présumées, les membres de leur famille ou leurs représentants ont la capacité de présenter, tout au long de la procédure, leurs demandes, arguments et éléments de preuve de façon autonome (article 43).

Selon le nouveau et quatrième Règlement de la Cour, celle-ci pourra décider la jonction d'affaires pour cause de connexité, à n'importe quelle étape d'instruction de l'affaire, pourvu qu'il y ait identité de parties, d'objet et de base normative entre les affaires faisant l'objet de la jonction (article 28). Cette disposition s'inscrit aussi dans le cadre de l'objectif de rationalisation de la procédure suivie dans les affaires portées devant la Cour. Le Règlement 2000 dispose, en outre, que la présentation des demandes ainsi que les demandes d'avis consultatifs, doivent être transmises non seulement au Président et aux autres juges de la Cour, mais aussi au Conseil permanent de l'OEA, par l'intermédiaire de son Président; et, en ce qui concerne les demandes, elles devront aussi être remises à l'État requis, à la CIDH, au dénonciateur originel et à la victime présumée, aux membres de sa famille ou à ses représentants dûment accrédités [articles 35(2) et 62(1)].

S'agissant des mesures provisoires de protection, bien qu'il ait été d'usage jusqu'à présent que la Cour tienne – lorsqu'elle le juge nécessaire – des audiences publiques sur ce sujet, cette possibilité est exclue dans le Règlement de 1996. En revanche, le nouveau Règlement 2000 comporte une disposition selon laquelle la Cour, ou son Président si celle-ci ne siège pas, pourra convoquer les parties, si elle le juge nécessaire, à une audience publique sur les mesures provisoires (article 25).

En matière de réparations, le Règlement 2000 détermine que, parmi les prétentions exprimées dans le texte de la demande elle-même, il faut inclure ce qui se rapporte aux réparations et aux dépens [article 33(1)]. Quant aux arrêts rendus par la Cour, ils doivent comprendre, *inter alia*, la décision sur les réparations et les dépens (article 55.1.h). Là encore, l'objec-

tif est de réduire la durée du procès en cours d'instruction, conformément aux principes de rapidité et d'économie judiciaires et au profit de tous les intéressés.

Comme l'a recommandé l'Assemblée générale de l'OEA (cf. *supra*), la Cour a introduit dans son nouveau Règlement 2000 une série de mesures de nature à permettre aux victimes présumées, aux membres de leur famille ou à leurs représentants dûment accrédités de participer directement (*locus standi in judicio*) à toutes les étapes de l'affaire portée devant le Tribunal. Dans une perspective historique, c'est la modification la plus importante du quatrième Règlement de la Cour, outre qu'elle représente une véritable étape dans l'évolution du système interaméricain de protection des droits de la personne.

Le Règlement précédent, c'est-à-dire celui de 1996, avait marqué le premier pas dans cette direction, puisqu'il habilitait les victimes présumées, les membres de leur famille ou leurs représentants à présenter leurs propres arguments et éléments de preuve de façon autonome, en particulier dans l'étape des réparations (article 23). Si les victimes présumées sont présentes *au début* du procès (étant supposées lésées dans leurs droits), ainsi qu'à la fin du procès (comme d'éventuels bénéficiaires des réparations), pour quelle raison leur présence serait-elle refusée pendant le procès, en tant que partie requérante à part entière? Le Règlement 2000 a permis de remédier à cette incohérence qui a persisté plus de vingt ans (depuis l'entrée en vigueur de la Convention américaine) dans le système interaméricain de protection.

En effet, selon le Règlement de 2000 de la Cour interaméricaine, les victimes présumées, les membres de leur famille ou leurs représentants pourront présenter des demandes, des arguments et des éléments de preuve de façon autonome pendant toute la durée du procès en instance devant le Tribunal (article 23). Ainsi, une fois que la Cour notifie la demande à la victime présumée, aux membres de sa famille ou à ses représentants, elle leur accorde un délai de trente jours pour la présentation, de façon autonome, des textes contenant leurs demandes, arguments et preuves (article 35.4). De même, pendant les audiences publiques, ils pourront prendre la parole pour la présentation de leurs arguments et preuves, en tant que partie au procès à part entière (article 40.2)⁵. Grâce à ce progrès important, il est enfin manifeste que les véritables parties à une affaire contentieuse portée devant la Cour sont les individus requérants et l'État requis et, seulement sur le plan de la procédure, la Commission interaméricaine (article 2.23).

En étant habilités à participer directement (*locus standi in judicio*) à toutes les étapes de la procédure observée dans l'affaire en cours d'instruction devant la Cour, les victimes présumées, les membres de leur famille ou leurs représentants ont désormais tous les droits et devoirs, en matière de procédure, qui, jusqu'au Règlement de 1996, relevaient exclusivement

5 En ce qui concerne la demande d'interprétation, elle sera communiquée par le Secrétaire de la Cour aux parties à l'affaire – y compris naturellement aux victimes présumées, aux membres de leur famille ou à leurs représentants, – pour qu'elles présentent les textes allégués qu'ils jugeront pertinents, dans un délai fixé par le Président de la Cour (article 58(2)).

de la Commission et de l'État requis (sauf dans l'étape des réparations). Cela suppose que, dans la procédure suivie dans l'affaire, il pourra exister, ou coexister, trois positions distinctes: celle de la victime présumée (ou des membres de sa famille ou de ses représentants), en tant que sujet du droit international des droits de l'homme; celle de la Commission, en tant qu'organe auxiliaire de la Cour; et celle de l'État requis

Cette réforme historique introduite dans le Règlement de la Cour attribue aux différents acteurs le bon rôle; contribue à une meilleure instruction du procès; assure le principe du contradictoire, qui est indispensable à la recherche de la vérité et du triomphe de la justice conformément à la Convention américaine; reconnaît comme un élément essentiel du contentieux international des droits de l'homme la confrontation directe entre les individus requérants et les États requis; reconnaît le droit à la libre expression des victimes présumées elles-mêmes, lequel est un impératif d'équité et de transparence du procès; et, *last but not least*, elle garantit l'égalité procédurale des parties (*equality of arms/égalité des armes*) pendant toute la procédure suivie dans l'affaire portée devant la Cour⁶.

VII. Visites de Présidents latino-américains au siège de la Cour interaméricaine des droits de l'homme

Le 4 avril 2000, j'ai reçu, en compagnie du juge Alirio Abreu Burelli, à San José de Costa Rica, le Président de la République fédérative du Brésil, Fernando Henrique Cardoso, accompagné d'un entourage de haut niveau. En raison de cette visite, nous avons reçu le lendemain, au siège du Tribunal, le Secrétaire d'État aux droits de l'homme, M. José Gregori, accompagné du Directeur du service des droits de l'homme et des questions particulières du Ministère des affaires étrangères, l'Ambassadeur Marco Antônio Diniz Brandão et le Député Ney Lopes, qui représentait le Parlement latino-américain.

Le 29 mai 2000, en ma qualité de Président de la Cour, j'ai reçu le Président de la République de Colombie, Andrés Pastrana Arango, au siège de la Cour, accompagné de hautes personnalités dont le Ministre des affaires étrangères colombien, Guillermo Fernández de Soto et l'Ambassadeur de Colombie à San José de Costa Rica, Julio Aníbal Riaño Velandia. La suite du Président Andrés Pastrana a été accompagnée à la cérémonie, qui s'est déroulée à la Cour,

6 Voir A.A. Cançado Trindade, "El Nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000): El Ser Humano como Sujeto del Derecho Internacional", *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos* (2001), numéro spécial (sous presse). Et voir, antérieurement, A.A. Cançado Trindade, "El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (1948-1995): Evolución, Estado Actual y Perspectivas", in *Derecho Internacional y Derechos Humanos/Droit international et droits de l'homme* (Livre commémoratif de la XXIV^e Session du Programme extérieur de l'Académie de Droit international de La Haye, San José de Costa Rica, avril-mai 1995), La Haye/San José, IIDH/Académie de Droit International de La Haye, 1996, pp. 47-95; A.A. Cançado Trindade, "The Procedural Capacity of the Individual as Subject of International Human Rights Law: Recent Developments", in *Karel Vasak Amicorum Liber - Les droits de l'homme à l'aube du XXI^e siècle*, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 521-544.

par le Président de la République du Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, entre autres personnalités costariciennes.

Le 12 septembre 2000, j'ai reçu au nom de la Cour, au siège du Tribunal, le Président du Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, le Président de la République dominicaine, Hipólito Mejía Domínguez, et le Président élu des États-Unis du Mexique, Vicente Fox Quesada, accompagnés de hautes personnalités de leur illustre entourage ainsi que du pays hôte de la Cour.

Récemment, soit le 5 décembre 2000, j'ai également reçu au siège de la Cour le Président de la République argentine, Fernando de la Rúa, accompagné de hautes personnalités dont le Ministre des affaires étrangères argentin, Adalberto Rodríguez Giavarini et l'Ambassadeur d'Argentine à San José de Costa Rica, Manuel María Pinto. L'escorte du Président Fernando de la Rúa a été accompagnée à la cérémonie, qui a eu lieu à la Cour, notamment par le Président de la République du Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, et par le Ministre des affaires étrangères et du culte, Roberto Rojas López.

Toutes les visites présidentielles susindiquées, qui avaient été précédées par la visite du Président du Paraguay l'année dernière, représentent une série d'événements historiques pour le Tribunal, confirmant ainsi une tendance très salutaire à un rapprochement respectueux et à un dialogue constructif entre les États qui ont créé le système interaméricain de protection des droits de la personne et les organes chargés de veiller à l'application fidèle des dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et autres instruments concernant la protection des droits de la personne humaine dans le Continent américain.

Les Présidents de la République des pays susmentionnés ont souligné, pendant leurs visites respectives, la contribution de la Cour interaméricaine, à travers sa jurisprudence et sa doctrine, à la défense de la dignité de la personne humaine et au rétablissement des droits des individus qui ont été lésés dans les affaires sur lesquelles elle a rendu une décision. Ils ont aussi souligné le fait que grâce aux arrêts et avis consultatifs de la Cour les pays de la région prennent des initiatives pour adapter leurs législations nationales aux règles internationales de protection. Ils ont également mentionné les progrès importants que la Convention américaine a représentés en tant qu'instrument de base dans la protection des droits fondamentaux de l'être humain et reflet fidèle des aspirations des peuples de la région en matière d'exercice de la démocratie représentative et de la souveraineté de l'État de droit.

De plus, ils ont insisté, au cours de leurs visites, sur le devoir des États américains de renforcer le rôle de la Cour interaméricaine dans le Continent. Ils ont également souligné le fait que la ratification de la Convention américaine et la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour doivent être universelles pour consolider le système régional de protection. Enfin, ils ont souligné l'importance pour les États parties à la Convention américaine d'accepter intégralement les arrêts de la Cour, notamment de les exécuter fidèlement, et de remédier au problème du financement du système régional de protection des droits de l'homme.

VIII. XXXe Session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA (juin 2000)

L'Assemblée générale de l'OEA a tenu, du 4 au 6 juin 2000, sa XXXe Session ordinaire à Windsor (Canada). La Cour interaméricaine a été représentée par moi-même en ma qualité de Président, par son Vice-président, le juge Máximo Pacheco Gómez, et par le Secrétaire de la Cour, Manuel E. Ventura Robles. J'ai présenté à l'Assemblée générale le Rapport annuel des activités du Tribunal, correspondant à 1999, lequel a été adopté par la Résolution AG/RES.1716 (XXX-O/00). À cette occasion, les Délégations de 9 États ont pris la parole, devant la Commission générale de l'Assemblée, à l'appui des travaux de la Cour. Le mardi 6 juin 2000, l'Assemblée générale a réélu, dans leurs fonctions, par acclamation, pour un nouveau mandat de 6 ans, les juges Antônio A. Cançado Trindade (Brésil), Oliver Jackman (Barbade) et Alirio Abreu Burelli (Venezuela), pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

IX. Budget de la Cour

L'Assemblée générale de l'OEA a approuvé, lors de sa XXVIIe Session extraordinaire tenue à Washington D.C., le 12 octobre 2000, le budget 2001 de la Cour pour un montant de EU\$1 284 700,00 (un million deux cent quatre vingt quatre mille sept cents dollars des États-Unis d'Amérique). Bien que ce chiffre représente une augmentation sensible du budget de la Cour, je dois signaler qu'elle n'est pas suffisante pour couvrir les besoins croissants du Tribunal. Pour cette raison, le projet de budget pour 2002, qui a déjà été soumis par la Cour à l'examen des organes compétents de l'Organisation, comprend une nouvelle augmentation qui, nous l'espérons, sera approuvée par l'Assemblée générale lors de sa prochaine session qui aura lieu à San José de Costa Rica au début du mois de juin de l'année en cours.

Bien que le budget de la Cour interaméricaine soit financé par l'OEA, le Tribunal dispose aussi d'une contribution sous forme de don offert par le gouvernement costaricien à la Cour pour un montant annuel de EU\$100 000,00 (cent mille dollars des États-Unis d'Amérique), dans le cadre de l'engagement qu'il a pris en signant l'Accord portant établissement du siège de la Cour en 1983. Ce montant a déjà été approuvé par le Gouvernement costaricien dans le budget de 2001.

En ce qui concerne le projet de budget de la Cour pour l'an prochain, une augmentation substantielle a été sollicitée en vue de couvrir la hausse des coûts d'exploitation du Tribunal et de son Secrétariat. Cette augmentation s'explique du fait qu'avec la récente réforme du Règlement de la Cour, qui permet la participation directe (*locus standi in judicio*) des victimes présumées à toutes les étapes de la procédure suivie par le Tribunal, la Commission et l'État requis ne seront plus les seuls à comparaître, mais les individus demandeurs comparaitront aussi en tant que requérants à part entière. Cette augmentation a aussi été sollicitée parce que le Tribunal estime que, en raison du nombre des affaires en cours d'instruction devant le Tribunal, - 30 affaires contentieuses comme on l'a déjà vu, mais ce nombre peut s'accroître jusqu'à la fin de 2001, - le moment est venu de résoudre de façon définitive le problème du manque de

ressources de la Cour, dont notamment la carence de spécialistes au sein de son Secrétariat et le niveau insuffisant de leur rémunération.

Comme je l'ai déjà indiqué, les juges de la Cour ne sont pas rémunérés pour le travail qu'ils effectuent, non seulement pendant les sessions, lorsqu'ils se trouvent au siège du Tribunal, mais aussi lorsqu'ils étudient les dossiers et préparent les projets à leurs domiciles respectifs dans leur pays d'origine. Le système d'honoraires pour les travaux effectués au siège du Tribunal est clairement inadéquat, celui-ci étant de fait le seul tribunal international qui est encore dépourvu d'un tel système. Il faut accorder la priorité au financement pour l'établissement d'une Cour semi-permanente, à laquelle succèdera une Cour permanente, dotée des ressources nécessaires à son bon fonctionnement. Je me permets d'ajouter qu'avec l'augmentation considérable du nombre des affaires en instance devant la Cour, aucune génération de juges ne s'est révélée aussi indispensable que celle d'aujourd'hui, malgré le manque de ressources dont je viens de parler.

Les prochains jours, nous solliciterons officiellement devant la Commission des questions administratives et budgétaires de l'OEA un rendez-vous pour expliquer la portée de ce projet de budget aux Représentants. Nous sommes convaincus que notre pétition sera accueillie favorablement, comme il convient à un tribunal international de la plus haute hiérarchie dans notre système régional de protection, étant donné que le travail de la Cour interaméricaine est parlant en soi, en raison du niveau élevé de spécialisation et de technicité des arrêts et autres décisions qu'elle rend.

Nous serions très reconnaissants aux Représentants des États ici présents si grâce à leurs bons offices auprès des délégués accrédités devant la Commission des questions administratives et budgétaires, cet entretien pouvait être confirmé pour la première semaine d'avril. Je reviendrai alors à Washington DC. pour présenter à la Commission des questions juridiques et politiques, comme il a déjà été convenu avec sa Présidente, l'avis de la Cour sur le processus de réforme et de renforcement de notre système régional des droits de l'homme dans le cadre du Dialogue de la CAJP sur ce système.

X. Audit des états financiers de la Cour

Selon son bon usage, la Cour a soumis ses états financiers, correspondant à l'exercice budgétaire 2000, à un audit qui est actuellement en cours. Celui-ci a été confié à la société de vérificateurs externes indépendants Venegas, Pizarro, Ugarte y Co., Cabinet d'experts-comptables agréés, représentant de la firme HLB International au Costa Rica. L'audit porte sur les fonds provenant de l'OEA comme sur la contribution de l'État costaricien pour la même période. Un exemplaire du rapport de cet audit sera envoyé en temps voulu au Département des services financiers de l'OEA et à l'Inspecteur général de l'Organisation, selon la coutume de la Cour.

XI. Dons et accords de coopération internationale

Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le 5 juin 2000 à Windsor (Canada), lors de la XXXe Session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA, le Ministre des affaires étrangères du Brésil, l'Ambassadeur Luiz Felipe Palmeira Lampreia, a remis à la Cour, une contribution volontaire de EU\$50 000,00 pour renforcer les activités institutionnelles du Tribunal. À cette occasion, j'ai remercié le Ministre des affaires étrangères du Brésil pour ce don et j'en ai souligné l'importance à un moment où l'OEA elle-même est en quête d'un montant additionnel de ressources pour renforcer le système interaméricain de protection des droits de la personne. Ont été également présents à cette cérémonie l'Ambassadeur Carlos Alberto Leite Barbosa, ex-Représentant permanent du Brésil près l'OEA, ainsi que tous les membres de la Délégation du Brésil à l'Assemblée générale de l'OEA. Pour la Cour, y ont participé le Vice-président, le juge Máximo Pacheco Gómez et le Secrétaire, M. Manuel E. Ventura Robles.

Le 18 août 2000, a eu lieu la cérémonie d'inauguration du nouvel édifice de la Cour occupé par la Bibliothèque conjointe de la Cour et de l'Institut interaméricain des droits de l'homme, le Centre de documentation de l'Institut interaméricain et le service de rédaction du Tribunal. Outre les juges et le personnel du Secrétariat de la Cour, les invités du Tribunal comprenaient le Président de la République du Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; la Deuxième Vice-présidente de la République du Costa Rica, Elizabeth Odio Benito; le Ministre des affaires étrangères et du culte, Roberto Rojas López; la Ministre de la justice, Mónica Nagel; le Directeur exécutif de l'Institut interaméricain des droits de l'homme, Roberto Cuéllar, et des membres du Conseil d'administration de cet institut et du corps diplomatique accrédité auprès du Gouvernement costaricien.

À cette occasion, j'ai remercié le Gouvernement du pays hôte de son appui précieux, grâce auquel le patrimoine de la Cour interaméricaine a pu doubler, permettant ainsi d'établir les bases matérielles d'une future Cour interaméricaine fonctionnant en permanence. Enfin, une plaque remise par la Cour à la République du Costa Rica a été dévoilée en témoignage de sa reconnaissance pour l'obtention, dans le cadre de la coopération internationale, des fonds nécessaires à l'acquisition de l'édifice; ensuite, les autorités présentes ont parcouru les installations de la nouvelle Bibliothèque, qui est la plus complète du Continent américain en matière de droits de l'homme.

En ce qui concerne les accords de coopération internationale, la Cour a signé, en 2000, divers accords importants avec des institutions reconnues qui se consacrent à la protection et à la promotion des droits de l'homme, à savoir l'Institut international des droits de l'homme (de Strasbourg), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le *Centro Internacional Bancaja para la Paz y el Desarrollo* de la Fondation Caja Castellón, en Espagne.

De plus, on a assuré le suivi des accords signés les années précédentes avec la Cour Suprême de justice de la République du Costa Rica, la Cour Suprême de justice de la

République du Venezuela, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Université Carlos III de Madrid, le Centre Danés pour les droits de l'homme, l'Institut d'études juridiques de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et l'École nationale de la magistrature du Brésil.

XII. Relations avec d'autres organismes internationaux de protection des droits de l'homme

Dans le courant de 2000, la Cour a maintenu des relations permanentes avec divers organismes de protection des droits de l'homme et a travaillé en collaboration avec eux. À cet égard, il faut notamment souligner les réunions qu'elle a tenues avec le Président, les juges et le personnel de la Cour européenne des droits de l'homme en juillet et octobre derniers, à Strasbourg. La prochaine réunion entre les juges des deux Tribunaux internationaux des droits de l'homme aura lieu à San José de Costa Rica, en juin 2001.

En outre, des activités conjointes d'enseignement et de formation ont été menées avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), au siège de la Cour; le siège même du Tribunal a reçu la visite d'une délégation de l'Institut Raoul Wallenberg des droits de l'homme et du droit humanitaire, de Suède.

XIII. Conclusions

Je souhaiterais conclure la présentation du présent Rapport annuel de la Cour, couvrant 2000, en adressant un message positif aux Représentants des États, de ma part comme de celle de mes collègues du Tribunal. Je me permets de leur dire, comme je l'ai fait au début de mon exposé, toute la confiance que la Cour interaméricaine a dans les États parties à la Convention américaine comme garants de celle-ci. Il convient de signaler, à cet égard, les faits notables suivants:

- *Premièrement*, l'augmentation du nombre des États qui ont accepté la compétence contentieuse de la Cour, avec la reconnaissance récente par la République dominicaine, Haïti, le Mexique, le Brésil et la Barbade;

- *Deuxièmement*, la contribution positive apportée au système interaméricain de protection ces dernières années par plusieurs États devant la Cour, ceux qui ont satisfait en totalité ou en partie aux demandes respectives, acceptant les faits et leur responsabilité internationale; il convient de rappeler, à ce sujet, les exemples encourageants du Suriname (affaire *Aloeboetoe*), du Venezuela (affaires *El Amparo* et du *Caracazo*), de l'Argentine (affaires *Maqueda* et *Garrido y Baigorria*), de l'Équateur (affaire *Benavides Cevallos*), de la Bolivie (affaire *Trujillo Oroza*), du Guatemala (affaire *Blake*), et il y a quelques jours, du Pérou (affaire *Barrios Altos*); à cela, vient s'ajouter l'esprit de coopération et de loyauté dans les procès, dont ont fait preuve d'autres États requis devant la Cour, manifestant ainsi sans équivoque la confiance qu'ils mettent dans ses activités;

● *Troisièmement*, les récents événements qui se sont produits au Pérou et les récentes décisions prises par son gouvernement actuel, qui promettent de surmonter les difficultés qui séparaient l'État péruvien du système interaméricain de protection des droits de la personne, avec, comme conséquence, le renforcement de la Cour, à un moment où l'idéal de réalisation de la justice au niveau international gagne toujours plus de terrain;

● *Quatrièmement*, l'appui illimité que le pays hôte de la Cour, le Costa Rica, a apporté pendant plus de 20 ans à la Cour, y compris une aide financière, à laquelle viennent s'ajouter les dons récents du Mexique et du Brésil au Tribunal, destinés à mettre à jour ses publications officielles, puisque le budget de l'OEA ne prévoit pas de ressources pour la rédaction et la diffusion de la jurisprudence de la Cour depuis de nombreuses années;

● *Cinquièmement*, les visites historiques effectuées récemment au siège de la Cour par les Présidents de la République d'Argentine, du Brésil, de Colombie, du Costa Rica, du Mexique, du Paraguay et de la République dominicaine, qui ont encouragé le dialogue constructif, au plus haut niveau, entre les États parties à la Convention interaméricaine et à la Cour interaméricaine;

● *Sixièmement*, la preuve du pouvoir de convocation de la Cour, visant à renforcer le système interaméricain des droits de l'homme, avec la participation de plusieurs des juristes les plus distingués du monde, des experts de la question des droits de l'homme, qui ont assisté au Séminaire et aux quatre réunions d'experts organisés par la Cour, et la diffusion, aujourd'hui même à l'OEA, du premier tome du compte rendu du Séminaire susmentionné sur le thème "*Le Système interaméricain de protection des droits de la personne à l'aube du XXIe siècle*";

● *Septièmement*, l'approbation du nouveau Règlement de la Cour interaméricaine, qui va résolument dans le sens d'une participation pleine des victimes présumées – en tant que partie requérante – à toutes les étapes du contentieux porté devant la Cour interaméricaine, en tant que sujets du Droit international des droits de l'homme dotés de pleine capacité juridique internationale.

La Cour a réaffirmé son soutien aux travaux de la Commission des questions juridiques et politiques de l'OEA, présidée par l'Ambassadrice Margarita Escobar, de El Salvador, en ce qui concerne l'initiative visant à assurer le suivi du Dialogue sur le Système interaméricain de protection des droits de la personne. Le jeudi 5 avril de l'année en cours, j'aurai l'honneur et le privilège de m'adresser de nouveau à vous, Représentants des États membres de l'OEA, afin d'exposer l'avis et les recommandations de la Cour sur le financement du Système interaméricain de protection des droits de la personne.

Nous avons lancé des initiatives en faveur du renforcement de la sauvegarde internationale des droits de la personne humaine dans notre région du monde, conscients du fait que les institutions dont l'évolution ne suit pas celle de leur temps se sclérosent. Il est urgent d'obtenir les ressources humaines et matérielles additionnelles indispensables à la réalisation

intégrale de ce qui paraît parfois encore être, dans notre Continent, une utopie. Mais, devant les brutalités du monde contemporain, nous ne pouvons vivre sans utopies, nous avons au moins besoin de nous y réfugier, si nous désirons vraiment chercher les moyens de construire, pour les générations futures, un monde meilleur que celui dans lequel nous nous trouvons. Je suis convaincu que, tous ensemble, nous pourrons continuer de donner une impulsion à l'évolution irréversible de la protection internationale des droits de l'homme dans notre région, pour que la réalité de demain reflète fidèlement ce qui paraît encore être une utopie aujourd'hui. Bref, nous devons être à la hauteur des défis de notre temps, pour répondre à la nouvelle dimension des besoins de protection de l'être humain en ce début du XXIe siècle.

Madame la Présidente,
Mesdames les Ambassadrices,
Messieurs les Ambassadeurs et Représentants,

En mon nom et en celui des juges Máximo Pacheco Gómez, Hernán Salgado Pesantes, Alirio Abreu Burelli, Sergio García Ramírez et Carlos Vicente de Roux Rengifo, ainsi qu'au nom du Secrétaire, Manuel E. Ventura Robles, et du Secrétaire adjoint, Renzo Pomi, qui m'accompagnent à cette occasion, et du juge Oliver Jackman, qui n'a pu venir à Washington DC., je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu prêter à la présentation du Rapport annuel de la Cour interaméricaine des droits de l'homme correspondant à 2000, - soit la première présentation des activités de la Cour au XXIe siècle. Je vous remercie tous.

Washington, D.C.,
9 mars 2001.